

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres.

HAROLD BLAKEMORE

ROBERTO CORTÉS CONDE, Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato di Tella,
Buenos Aires

WARREN DEAN, catedrático de historia, Universidad de Nueva York

MALCOLM DEAS, *fellow* del St Antony's College, Oxford

BORIS FAUSTO, Universidad de São Paulo

EZEQUIEL GALLO, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires

PETER F. KLARÉN, catedrático de historia, Universidad George Washington, Washington, D.C.

HERBERT S. KLEIN, catedrático de historia, Universidad de Columbia, Nueva York

PAUL H. LEWIS, catedrático de ciencias políticas, Newcomb College, Universidad de Tulane,
Nueva Orleans

JUAN A. ODDONE, Universidad de la República, Montevideo

DAVID ROCK, catedrático de historia, Universidad de California en Santa Bárbara

EMÍLIA VIOTTI DA COSTA, catedrática de historia, Universidad de Yale

LESLIE BETHELL, Ed.

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA

10. AMÉRICA DEL SUR, c. 1870-1930

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición en rústica: septiembre de 2000

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original:
THE CAMBRIDGE HISTORY OF LATIN AMERICA
V. C. 1870 To 1930

Traducción castellana de
JORDI BELTRAN y MARÍA ESCUDERO

Diseño de la cubierta: Joan Batallé
© 1986: Cambridge University Press, Cambridge
© 1992 de la traducción castellana para España y América:
EDITORIAL CRÍTICA, S.L., Provença, 260, 08008 Barcelona
ISBN: 84-7423-435-2 obra completa
ISBN: 84-8432-107-X tomo 10
Depósito legal: B. 33.880-2000
Impreso en España
2000.—Domingraf, S.L., Mollet del Vallès (Barcelona)

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo xv y comienzos del xvi, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del xviii y principios del xix.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo xix, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el periodo, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el periodo que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la

Capítulo 14

BRASIL: LA ERA DE LA REFORMA, 1870-1889

Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, las décadas de 1870 y 1880 fueron en Brasil periodos de reforma y compromiso con el cambio. Intelectuales, profesionales, militares —gente de extracción urbana, aunque a menudo con raíces rurales—, formaron asociaciones para la abolición de la esclavitud y organizaciones para la promoción de la inmigración europea, hicieron campaña en favor del federalismo y de la autonomía provincial, sostuvieron la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, participaron en campañas para la reforma electoral, y apoyaron al Partido Republicano. Tampoco eran estos los representantes de la clase agraria y mercantil dominante, conocida por su conservadurismo, completamente inmune a las ideas progresistas. En los años sesenta, miembros del Partido Conservador rompieron con sus tradicionales lealtades y se unieron al Partido Liberal, mientras que muchos liberales abandonaron su partido para crear el Partido Republicano en 1870. Los intelectuales, por su lado, criticaban la filosofía tradicional, condenaban las convenciones literarias románticas y ridiculizaban el sistema de enseñanza; cultivaban ideas positivistas y evolucionistas, adoptaban nuevas formas de expresión y proponían un nuevo sistema de enseñanza más orientado hacia las ciencias y la tecnología. En definitiva repudiaban lo que consideraban como retórica liberal vacía, criticaban a las clases dominantes y convertían al «pueblo» en el objeto central de su discurso.

A principios de la década de 1890, los reformistas podían enorgullecerse de haber logrado muchos de sus objetivos. En 1881 se había puesto en práctica una reforma electoral. El Parlamento había abolido la esclavitud en 1888. Grandes cantidades de inmigrantes europeos habían empezado a entrar en el país. Finalmente, en 1889, un golpe militar había derrocado la monarquía. El nuevo régimen republicano adoptó un sistema federal, amplió el sufragio y separó los poderes de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, lo que para unos era un éxito, para otros era un fracaso. Una gran parte de los que habían luchado para crear un nuevo sistema político, muy pronto empezaron a expresar su desacuerdo. Las oligarquías rurales continuaban ejerciendo el control gubernamental, estatal y

federal, y la gran mayoría de la población brasileña —pobres libres, ex esclavos, e inmigrantes— continuaba tan explotada como siempre. Tras dos décadas de reforma, parecía no haber cambios fundamentales en el país.

Algunos historiadores han atribuido las reformas de finales del siglo XIX a la influencia de las ideas extranjeras en la sociedad brasileña. El abolicionismo, el darwinismo social, el spencerismo, y el positivismo —dicen—, condujeron a los brasileños a cuestionar y a preocuparse por cambiar las instituciones existentes. Otros historiadores han visto las reformas como producto de un conflicto generacional, descrito a menudo como un conflicto entre grupos urbanos y rurales, o entre costumbres modernas y tradicionales. Según estos autores, los jóvenes graduados en escuelas profesionales y acostumbrados al estilo urbano de vida se convirtieron en críticos de las instituciones creadas por las elites agrarias, las mismas de las que descendían muchos de ellos.¹ El conflicto entre el oligarca rural (*patriarca*) y su hijo profesional (*bacharel*) ha tenido incluso interpretaciones psicoanalíticas.² Pero la interpretación reciente que cuenta con más partidarios atribuye las reformas a los cambios ocurridos en la estructura económica y social de Brasil durante el siglo XIX, y a la aparición de una burguesía urbana que se alió con los segmentos más progresistas de las oligarquías rurales para luchar contra las elites tradicionales.

Estos enfoques en litigio, que a veces se presentaron como alternativos, en realidad son compatibles, e incluso complementarios. Pero también son insuficientes para explicar por sí mismos el sentido y contenido de las reformas, y plantean problemas que tampoco pueden resolver. No hay duda, por ejemplo, de que los reformistas brasileños citaban a los autores europeos para fundamentar sus opiniones. Sin embargo, no se debe presumir que tuvieran esas opiniones porque hubieran leído a los autores europeos. Lo contrario parece más verosímil. Tal vez sería más correcto decir que fue su deseo de cambiar la sociedad lo que les predispuso a preferir a algunos autores europeos y no a otros. De otra forma, ¿cómo podríamos explicar su preferencia por Comte en detrimento de Marx, o de Spencer en detrimento de Fourier? y ¿cómo podríamos explicar que las ideas abolicionistas sólo empezaran a popularizarse en Brasil durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la esclavitud ya había sido condenada en Europa desde la Ilustración?

Si no podemos explicar las reformas mediante la mera referencia a las influencias exteriores, es igualmente insuficiente la interpretación que opone los grupos urbanos a los rurales, o los profesionales a los terratenientes, considerando a unos como la vanguardia del progreso y a los otros como el baluarte de la tradición. De hecho, algunos de los oradores más elocuentes en favor de las oligarquías rurales y de los dirigentes del Partido Conservador eran abogados, burócratas y médicos —hombres profundamente enraizados en el medio urbano. Pero, si bien es cierto que en la mayoría de las provincias los seguidores del Partido Republicano se encontraban entre los grupos profesionales, el núcleo de este partido en São Paulo estaba constituido en su mayoría por plantadores de café.

1. Véase, por ejemplo, el clásico estudio de Gilberto Freyre, *Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano*, 3 vols., Río de Janeiro, 1951².

2. Luís Martins, *O patriarca e o bacharel*, São Paulo, 1953.

Aunque pudiéramos demostrar que la mayoría de los reformistas procedía de las clases medias urbanas, aún tendríamos que explicar por qué se vieron apartados del régimen. Análogamente, aunque pudiéramos demostrar que la mayoría de los militantes reformistas pertenecía a la generación nacida en la segunda mitad del siglo XIX, y tenía entre treinta y cuarenta y pocos años en el momento de la proclamación de la república, todavía tendríamos que explicar por qué fueron ellos, y no los de la generación precedente, los que hicieron un ataque sistemático contra las instituciones tradicionales.

En términos generales, se puede decir que la reforma en Brasil, al igual que en otros países latinoamericanos, fue una respuesta a las nuevas realidades económicas y sociales que resultaron del desarrollo capitalista, no sólo como fenómeno de ámbito mundial, sino también en sus manifestaciones específicamente brasileñas. En Brasil, como en otras partes, el desarrollo económico (urbanización, inmigración, mejoras en el transporte, el surgimiento de la primera industria manufacturera y la acumulación de capital) provocó dislocaciones sociales: el nacimiento de nuevos grupos sociales y la decadencia de sectores tradicionales. Hacia las décadas de 1870 y de 1880, las instituciones creadas a raíz de la independencia de Brasil en 1822 y la hegemonía política de las oligarquías terratenientes y comerciales tradicionales eran, para esos nuevos grupos, obstáculos anacrónicos para el progreso.

Sin embargo, el hecho de reconocer que el cambio económico y social condujo hacia demandas de cambio institucional no basta para explicar por qué las oligarquías tradicionales no fueron capaces de incorporar a los nuevos grupos o satisfacer sus demandas. Para explicar este fracaso y para entender tanto los objetivos como la retórica de los reformistas, la naturaleza de sus demandas y sus motivos para oponerse más a algunas instituciones que a otras, hay que mirar además del cambio económico hacia las instituciones políticas y culturales que ellos atacaban. Para poder explicar por qué el sistema político creado en 1822 se convirtió en el blanco de las críticas durante las décadas de 1870 y 1880 es necesario conocer cómo funcionaba realmente el sistema.

CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante el siglo XIX hubo importantes cambios demográficos en Brasil. La población aumentó de 3,8 millones de habitantes en 1822 a poco más de 10 millones en 1872, y a más de 14 millones en 1889, año de la proclamación de la república. El cambio demográfico fue mayor en unas provincias que en otras, lo que alteró la distribución inicial que había servido de base para la representación electoral. Entre 1822 y 1870, la población del noreste creció a un ritmo anual del 2 por 100. Durante el mismo período, Pará, que se benefició del repentino auge del caucho, creció a un ritmo anual del 3 por 100, y São Paulo, del 3,5 por 100, principalmente como resultado de la expansión de las plantaciones de café. También hubo cambios en la población de esclavos. Los esclavos, que habían constituido más de la mitad de la población en 1822, y el 15,8 por 100 en 1872, en 1888 representaban un escaso 5 por 100. La población esclava disminuyó en las ciudades y se concentró en las áreas de las plantaciones, en las cuales la econo-

mía estaba en expansión. En 1822, casi el 70 por 100 de la población esclava vivía en las áreas de plantación azucarera del noreste y del este. Sesenta años más tarde, en esas zonas sólo vivía el 35 por 100 de la población esclava, mientras que el 65 por 100 estaba concentrada en las provincias cafeteras del sur.

Los inmigrantes también tendían a establecerse en el sur, más que en el norte o en el noreste. Los que llegaron entre 1872 y 1889 se ubicaron preferentemente en las áreas rurales de São Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Pero muchos de ellos se establecieron en centros urbanos. En 1872, Río de Janeiro tenía una población de 275.000 personas, 84.000 de las cuales habían nacido en el extranjero. En la misma fecha, los inmigrantes representaban el 12 por 100 de la población de Porto Alegre, el 11 por 100 de la de Curitiba, y el 8 por 100 de la de São Paulo. Estas cifras continuaron creciendo. El censo de 1890 mostraba que el 22 por 100 de la población total de São Paulo había nacido en el extranjero. En esa fecha, había 150.000 extranjeros en el país, el 70 por 100 de los cuales se concentraba en Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, y otro 17,6 por 100 en Rio Grande do Sul.

Un fenómeno aún más importante que el crecimiento de la población o la llegada de inmigrantes fue la acumulación de capital debida al extraordinario crecimiento de las exportaciones de café, y en menor medida de las exportaciones de cacao y caucho, especialmente después de 1860. El crecimiento económico benefició a algunas provincias más que a otras, alterando sus importancias relativas dentro de la escena nacional. Las exportaciones de café de las zonas centro y sur, y principalmente de São Paulo, se incrementaron en un 341 por 100 y los precios en un 91 por 100 en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que las exportaciones azucareras del noreste crecieron sólo el 33 por 100 y los precios del azúcar descendieron un 11 por 100. A pesar del crecimiento de las importaciones, Brasil tuvo un considerable superávit en su balanza comercial después de 1861. Sin embargo, varios factores inhibieron la acumulación de capital. La repatriación de utilidades por parte de las compañías, en su mayoría británicas que tenían fuertes inversiones en los sectores más lucrativos de la economía, los pagos de intereses de los créditos británicos al gobierno brasileño para financiar el gasto gubernamental que tendía a crecer más rápidamente que los ingresos (en las últimas décadas del imperio, los pagos de intereses de la deuda externa consumieron una media del 40 por 100 de la balanza comercial), y, finalmente, la manipulación del tipo de cambio por parte de los británicos, fueron todos ellos factores limitativos de la acumulación de capital en Brasil. Además, el capital se solía acumular en manos de los plantadores de café y de los comerciantes conectados con las exportaciones e importaciones. De esos grupos procedía parte del capital invertido en ferrocarriles, bancos e industrias. Sólo de forma secundaria, el capital se acumuló en manos de grupos orientados exclusivamente hacia el mercado interno. Y, a pesar de su expansión, éste seguía siendo limitado. Esta forma peculiar de acumulación de capital en Brasil —que resultó no sólo de su posición en el mercado internacional, sino también de decisiones tomadas por las clases dominantes brasileñas— explica tanto la naturaleza como las limitaciones de los cambios que tuvieron lugar en la sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX, y, hasta cierto punto, define los límites del reformismo brasileño.

Una de las consecuencias de este tipo de crecimiento económico fue que la acumulación de capital favoreció principalmente a los centros urbanos y a las áreas rurales relacionadas con los sectores de importación-exportación. Entre 1872 y 1890, la ciudad de Río casi dobló su población. Entre 1872 y 1886, la ciudad de São Paulo creció a un ritmo del 5 por 100 anual, y del 8 por 100 entre 1886 y 1890. La población de la ciudad de Salvador pasó de 129.000 habitantes en 1872, a 174.000 en 1890.

La acumulación de capital permitió mejorar los servicios urbanos. Los servicios públicos de agua, alcantarillado, gas, la pavimentación de las calles y los nuevos sistemas de transporte urbano cambiaron la vida de las ciudades. Entre 1868 y 1888 se introdujeron los tranvías en Recife, Salvador, Río de Janeiro, San Luis, São Paulo y Campinas. En 1870 se instaló una línea de telégrafo que unía Brasil con Europa, y durante los años siguientes la mayoría de ciudades brasileñas establecieron comunicación entre sí. En 1861 fueron enviados 62.233 telegramas. Este número aumentó a 390.277 en 1885-1886. En la década de 1880, São Paulo, Salvador, Río de Janeiro y Campinas dispusieron de servicio telefónico. En 1887, siete líneas de tranvía transportaron un millón y medio de pasajeros.

El número de escuelas en las ciudades también aumentó, y disminuyó el analfabetismo. Pero en las áreas rurales continuó siendo elevado. En 1835, el porcentaje de alfabetización en la ciudad de São Paulo era del 5 por 100. En 1882, el índice alcanzó el 42 por 100. (En esa época sólo el 29 por 100 de la población rural estaba alfabetizada.) Se empezaron a multiplicar los diarios y revistas, las asociaciones artísticas y culturales, las hospederías, teatros, cafés y tiendas, y las grandes ciudades adquirieron un aire más cosmopolita. En los barrios ricos, las casas tradicionales construidas con *taipa* (listones de madera y argamasa) fueron reemplazándose gradualmente por casas de ladrillo al estilo europeo. En los interiores, el pesado mobiliario colonial de palisandro cedió su lugar a ligeros muebles ingleses de caoba. Los barracones de esclavos (*senzalas*) fueron desapareciendo paulatinamente. Los trabajadores libres que reemplazaron a los esclavos se fueron mudando a casas de alquiler en el centro de las ciudades o a pequeñas casas en las áreas suburbanas. Las calles dejaron de ser territorio exclusivo de los hombres, esclavos y clases subalternas, y se empezó a ver con más frecuencia en los lugares públicos a mujeres de clase alta y media. También había más escuelas y puestos de trabajo para mujeres que anteriormente. Podía vérselas como maestras, costureras y oficinistas. En las últimas décadas del imperio, las costumbres habían ido cambiando, y surgieron nuevas oportunidades de inversión, empleo, movilidad social y participación política.

Sin embargo, todo esto sucedía principalmente en las ciudades portuarias. En el interior sólo se desarrollaron unas pocas poblaciones que funcionaban como importantes centros comerciales, como São Paulo, Campinas y Pelotas. Los propietarios de plantaciones llevaron algún tipo de progreso hacia las áreas rurales: modernizaron sus residencias y jardines en las haciendas y promovieron asociaciones culturales y artísticas en las ciudades del interior. Pero, con esas excepciones, el contraste entre las ciudades portuarias y las áreas rurales continuó siendo espectacular. Las ciudades brasileñas fueron más producto de la expansión del comercio internacional que del crecimiento de un mercado inter-

no; por eso estuvieron orientadas hacia Europa y tuvieron un papel relativamente poco importante en la transformación del interior del país.

Las líneas ferroviarias, en su mayor parte construidas con capital extranjero, empezaron a reemplazar a los sistemas tradicionales de transporte, como el transporte a lomo de mulas, las carretas tiradas por bueyes y las barcazas. Entre 1854 y 1872 se construyeron 933,3 kilómetros de vía férrea; entre 1873 y 1889 se añadieron otros 8.000 kilómetros; y hacia finales del imperio había 15.000 kilómetros en construcción. En algunas regiones, el ferrocarril creó mejores condiciones para la integración del mercado interno. Sin embargo, la construcción de vías férreas se realizó principalmente para facilitar la circulación de productos brasileños hacia el mercado internacional, y por esta razón se solían concentrar en las áreas cafeteras y azucareras y se orientaban hacia las ciudades portuarias.

La mejora de los medios de comunicación, el crecimiento del mercado interno, la acumulación de capital, y sobre todo la elevación de los aranceles a la importación, que el gobierno se vio obligado a adoptar para incrementar sus ingresos, favorecieron el desarrollo de las industrias. Entre 1875 y 1890 el número de fábricas creció de 175 a más de 600. En 1880 había 18.100 personas registradas como trabajadores de la industria; diez años más tarde su número llegó a 50.000. Las fábricas productoras de bienes de consumo —tejidos, cerveza, cigarrillos, jabones, veias, cerillas, sombreros—, así como las curtidorías, fundiciones, aserraderos y fábricas de papel y de vidrio, estaban concentradas en los centros urbanos de Minas Gerais, Río de Janeiro, São Paulo y Río Grande do Sul, en donde la disponibilidad de mano de obra y capital, de una infraestructura de crédito y transporte, y la existencia de un mercado relativamente estable, creaban condiciones favorables para el desarrollo industrial. La guerra con Paraguay estimuló la fabricación de productos náuticos, ópticos y químicos. En los años ochenta, los industriales —aunque todavía en pequeño número— se sintieron lo suficientemente fuertes para fundar la Asociación Industrial en Río de Janeiro, con el propósito de defender sus intereses. Era uno más entre los muchos grupos de intereses que habían aparecido en la escena política como consecuencia de los cambios que tuvieron lugar en Brasil en la segunda mitad del siglo XIX. El cambio económico y social hacía cada vez más difícil a las élites políticas el manejo de la nación según las pautas tradicionales, y en las dos últimas décadas del siglo el régimen imperial se convirtió en el blanco de críticas por parte de muchos grupos de la sociedad.

El crecimiento económico produjo importantes desequilibrios entre el poder económico y el político. La diversificación económica creó conflictos de intereses entre provincias cuya economía estaba orientada principalmente hacia el mercado interno y provincias orientadas principalmente al mercado exterior, entre provincias que todavía dependían de la mano de obra esclava y provincias en que la esclavitud ya había desaparecido. Las provincias compitieron por subsidios y créditos gubernamentales. La presión para ampliar la infraestructura hizo que las provincias se tornaran más conscientes de su dependencia del gobierno central. La situación se complicó por los conflictos en cada una de las provincias entre los plantadores que modernizaban sus métodos de producción y aquellos que, por falta de capital, continuaban empleando los métodos tradicio-

nales. La producción de azúcar sufrió una transformación fundamental. En 1857, el 66 por 100 de los ingenios azucareros de Pernambuco estaba accionado todavía por tracción animal, el 31 por 100 por agua, y sólo el 2 por 100 funcionaba con vapor. Pero después de 1870, el número de ingenios accionados por vapor creció rápidamente, alcanzando el 21,5 por 100 en 1881. Se introdujeron en los hornos, tachos al vacío, centrifugadoras y otros adelantos. También se mejoraron los procesos del café mediante el uso de secadores, desgranadores y trilladoras. Todo eso condujo a un aumento de la productividad. Junto a los cambios en los sistemas de fabricación, también hubo cambios en el sistema de la mano de obra, con el número creciente de trabajadores libres en ciertas áreas, mientras que en otras se continuaba recurriendo a los esclavos. Dado que no todos los propietarios tenían capital suficiente para modernizar sus plantaciones, muchos tuvieron que seguir recurriendo a las prácticas tradicionales. A menudo, éstos se enfrentaban en la legislatura con los representantes de las áreas más productivas cuando discutían temas relacionados con la política de tierras y de la mano de obra, el trazado de las líneas férreas y los subsidios gubernamentales. Unos querían reemplazar los esclavos por culíes, mientras que otros preferían los inmigrantes europeos a los chinos. Algunos pensaban que el gobierno debía subvencionar la inmigración y que los inmigrantes no debían tener acceso a la tierra para que así fuesen forzados a trabajar en las plantaciones. Otros eran contrarios a los subsidios y querían atraer a los inmigrantes dándoles tierras.

El crecimiento económico y la diversificación no sólo produjeron conflictos entre grupos agrarios, sino que crearon grupos de interés ligados al ferrocarril, a las industrias, a los bancos y seguros, a las compañías de inmigración y a los servicios públicos. Esos grupos tenían sus propias reivindicaciones, y sus intereses no siempre coincidían con los de los que controlaban el gobierno central. Los industriales, por ejemplo, solicitaban aranceles proteccionistas y apoyo gubernamental, pero al mismo tiempo se quejaban de las interferencias políticas y del control gubernamental. En el manifiesto publicado en 1881 por la recién creada Asociación Industrial se acusaba al gobierno de ignorar los esfuerzos de los industriales y de poner obstáculos a sus empresas. Se acusaba al gobierno de favorecer a los plantadores de café y de adoptar una política de libre comercio que dificultaba el desarrollo industrial. En el manifiesto también se criticaba la enseñanza que recibían las clases dirigentes en las facultades de derecho, que los convertía en letrados en lugar de científicos. Finalmente, se quejaba de la ausencia de representación parlamentaria de las «clases productivas».³

Los industriales tenían otras razones para estar descontentos. Las frecuentes crisis que golpearon al mundo capitalista durante el siglo XIX dañaron a los hombres de negocios brasileños. Cuando los bancos de Londres y Nueva York retiraron el crédito y cayeron los precios de los productos de exportación en los mercados internacionales, se produjo una sucesión de bancarrotas. En 1857, 1864 y 1873, importantes empresas tuvieron que ser liquidadas, produciendo el pánico en el mercado financiero y un descontento general, traducido a menudo en forma de críticas contra la política económica del gobierno.

Los hombres de negocios y empresarios no fueron los únicos que criticaban

a las elites políticas y a las clases dominantes. Los pobres que vivían en los centros urbanos sufrían por la subida de precios de los productos alimentarios, y a menudo atribuían sus desgracias a la política gubernamental. El número creciente de asalariados en las ciudades planteó nuevas cuestiones y creó problemas de control social, que la élite, habituada a tratar con esclavos, todavía no sabía cómo manejar. La *revolta dos vintenos* (la revuelta de los veintenos, antigua moneda de cobre portuguesa), que provocó la caída de un gabinete, fue quizá la más importante del periodo. Tuvo lugar en Río el 1 de enero de 1880, cuando las masas, exasperadas por el aumento del precio del billete del tranvía, se enfrentaron a la policía, que sólo consiguió restablecer el orden después de tres días de disturbios.

Los artesanos y trabajadores, que se quejaban de la competencia de los productos extranjeros, protestaban a menudo contra la política del gobierno, pidiendo medidas proteccionistas para los productos nacionales. Sus manifiestos a veces se parecían a los de los industriales. En 1885, por ejemplo, en una carta dirigida al emperador, el Corpo Coletivo União Operária pedía la exención de los aranceles de importación de maquinaria industrial, la exención de impuestos sobre la propiedad en las fábricas, la abolición de privilegios y monopolios concedidos a ciertos comercios, derechos arancelarios sobre los productos extranjeros, y facilidades crediticias.⁴ Pero al mismo tiempo empezó a surgir con más frecuencia en los periódicos dirigidos a los obreros una retórica de lucha de clases. El número de organizaciones obreras creció en la última década del imperio y apareció el primer partido socialista. En la década de 1880, manifestaciones ocasionales de obreros empezaron a cambiar el ritmo de vida en las ciudades.

Las nuevas masas urbanas no sólo eran una fuente de preocupaciones, sino que constituían un electorado potencial. Por primera vez, los políticos se dirigían a las masas en espacios públicos. Los abolicionistas fueron el primer grupo que lo hizo sistemáticamente. Hombres como Lopes Trovão (uno de los pocos socialistas de su época) dejaron las salas de conferencias y los salones para hablar a la gente en las calles. Las costumbres políticas cambiaron. Un número creciente de mujeres se comprometió con asociaciones abolicionistas. Los periódicos dirigidos al público femenino se multiplicaron, y apareció la primera prensa feminista en demanda del acceso de la mujer a las escuelas profesionales.

El cambio económico en el campo también causó profundas dislocaciones sociales, que se reflejaron en la escena política. Con la expansión del mercado interno y las mejoras en los medios de transporte, campesinos que se habían dedicado sobre todo a la producción de subsistencia empezaron a producir más para el mercado. Esta transición fue acelerada por la creación de nuevos impuestos que tenían como objetivo proporcionar al gobierno los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura económica. En el interior, la acumulación de capital en manos de comerciantes y de unos pocos artesanos y pequeños granjeros acentuó las desigualdades sociales, rompiendo vínculos de parentesco y formas de acomodamiento tradicionales y creando un profundo malestar social expresado con frecuencia en rebeliones populares.

3. «Manifesto da Associação Industrial», en *Temas*, I (1977), pp. 91-100.

4. En Edgard Carone, *Movimento operário no Brasil (1877-1944)*, São Paulo, 1979, pp. 204-210.

Un buen ejemplo de este proceso fue la «rebelión de los *muckers*» (patanes), que se produjo en Rio Grande do Sul entre 1868 y 1874. Durante esos años, las tradicionalmente pacíficas comunidades de colonos alemanes de São Leopoldo se vieron sacudidas por un movimiento mesiánico que finalizó en una violenta confrontación entre los rebeldes y las autoridades locales. Los rebeldes, conocidos como los *muckers*, condenaban el dinero y el comercio y rechazaban los nuevos modelos de movilidad social, prestigio y relaciones de clases basados en el dinero. Acusaban a los ricos de oscurantismo e intentaron invertir los modelos sociales organizando un grupo regido por los principios de fraternidad e igualdad. Los *muckers* rehusaban votar y abandonaron escuelas e iglesias para crear su propia religión, una religión que valoraba la comunicación directa con Dios. El movimiento fue reprimido por las autoridades, pero abrió los ojos a las elites sobre los peligros de una rebelión popular.

Por la misma época en que los *muckers* estaban revolucionando el sur, las tierras interiores del noreste fueron sacudidas por varios levantamientos conocidos como *quebra quilos*, debido a que los rebeldes protestaban contra el sistema métrico decimal. Pero en el fondo había mucho más que los *quilos*. Los granjeros pobres rehusaron aceptar el sistema métrico decimal, el reclutamiento militar y los nuevos impuestos establecidos por el gobierno. Hombres y mujeres furiosos invadieron los ayuntamientos y notarías, destruyendo las listas de impuestos y de reclutamiento, saquearon los comercios y aterrorizaron a los comerciantes extranjeros. El gobierno sospechó que tras los rebeldes estaban los sacerdotes, que se oponían al gobierno debido a la protección que éste daba a los francmasones, condenados por el papa. Pero el lema de «Abajo los masones», coreado por los rebeldes, tenía que ver más con su hostilidad hacia las clases dominantes que con su lealtad al clero. Ambas rebeliones, la de *quebra quilos* y la de los *muckers*, expresaban las frustraciones provocadas por las crecientes desigualdades sociales, la explotación y la destrucción de los sistemas tradicionales de vida.

EL SISTEMA POLÍTICO DEL IMPERIO

El sistema político creado en el momento de la independencia reflejaba las necesidades de una elite de terratenientes y comerciantes y su clientela, interesados en mantener las estructuras tradicionales de producción, basadas en la mano de obra esclava y en la exportación de los productos coloniales hacia el mercado internacional, y, sobre todo, en gobernar el país sin tener en cuenta a los sectores populares, a los que temían y despreciaban. El sistema era extremadamente centralista, oligárquico y nada representativo. Por eso no era lo suficientemente flexible para ajustarse a los cambios en la estructura económica y social que estaban ocurriendo en la segunda mitad del siglo XIX.

Según la Constitución de 1824, el primer mandatario, el emperador, era el responsable del nombramiento y la promoción de personal en la burocracia civil y militar. El emperador era también el encargado de poner en práctica la legislación aprobada por el Parlamento, y tenía la última palabra sobre la distribución de los recursos entre las diferentes ramas administrativas. Una de las responsabilidades más importantes del primer mandatario era la de conceder o denegar el

permiso para la implantación de las bulas papales en el país. El emperador también tenía poderes para nombrar a los obispos y para distribuir beneficios eclesiásticos. Además de sus poderes como primer mandatario, el emperador gozaba de otras prerrogativas como consecuencia del «poder moderador», una invención del publicista francés Benjamin Constant que había atraído a los redactores de la Constitución. Entre estas prerrogativas adicionales, el emperador tenía el poder de escoger y destituir a su primer ministro independientemente del Parlamento, prorrogar o disolver la Cámara de Diputados, y convocar nuevas elecciones. Esto significaba que si la Cámara denegaba su confianza a un gabinete, el emperador podía mantener el gabinete y disolver la Cámara, convocando nuevas elecciones. También tenía el derecho de nombrar a los miembros del Consejo de Estado y de escoger a cada senador entre la terna de candidatos que recibiera más votos en las elecciones al Senado. De todo esto se podría deducir que la Constitución había conferido un poder absoluto al emperador, y de hecho esta fue la opinión general durante el primer y el segundo imperio. Sin embargo, la Constitución también había limitado su poder, disponiendo que sus decisiones debían ser sometidas antes al Consejo de Estado para su discusión. Se podría argumentar que, dado que los consejeros habían sido escogidos por el emperador, tendrían la tendencia a estar de acuerdo con él, y en caso de que estuvieran en desacuerdo, no tenían poder para vetar sus decisiones. Aun así, la gratitud no era necesariamente sinónimo de servilismo. Además, como el nombramiento de consejero era vitalicio, eso les permitía que fuesen hasta cierto punto independientes del emperador.

Cuando se mira más allá de la letra de la Constitución y se examina su práctica, se puede constatar que, al contrario de lo que los críticos han dicho, Pedro II —por convicción y por temperamento— nunca impuso su voluntad en temas de importancia nacional. Cuando fue presionado por los consejeros, a menudo el emperador actuó contra sus propias convicciones. Las oligarquías, y no el emperador, manejaban el país. Pero la posición oficial que el emperador ocupó en la escena política concentró sobre él todas las esperanzas y resentimientos. Si el candidato senatorial que encabezaba la lista no era escogido por el emperador, que prefería al segundo o al tercero de la lista, aquél expresaba su resentimiento atacando al «poder moderador». Si el emperador elegía a un senador de la oposición, era criticado por el partido en el poder, y si escogía a uno del partido en el poder, era atacado por la oposición. Así, el derecho a escoger senadores y consejeros, ideado originariamente para aumentar los poderes del emperador, de hecho debilitaba su posición. Lo mismo se puede decir de su derecho a intervenir en el Parlamento. Entre 1840 y 1889, el emperador disolvió la Cámara once veces. En ocho de esas ocasiones su intervención ocasionó una inversión en la situación política: los liberales fueron reemplazados por los conservadores, o viceversa. Cada una de las veces, los que se vieron obligados a dejar sus escaños protestaron ruidosamente contra los «abusos del poder moderador».

Durante la década de 1850 y principios de la de 1860, periodo conocido como «de conciliación», esas crisis no tuvieron demasiado impacto debido a que existía un relativo consenso entre las elites, con liberales y conservadores incluidos en los mismos gabinetes. Pero con los crecientes conflictos de intereses

derivados de los cambios económicos y sociales, la conciliación se rompió. Liberales y conservadores compitieron por el poder en diferentes plataformas, y en el interior de cada partido los miembros que representaban intereses diferentes, y a veces conflictivos, discreparon en temas políticos de importancia. Como consecuencia no sólo los gabinetes eran inestables, sino que la intervención del emperador se volvía particularmente relevante y provocaba fuertes reacciones. El frecuente uso de la prerrogativa imperial de disolver la Cámara y convocar elecciones socavó tanto el prestigio del emperador como el del propio sistema monárquico.

El proceso político estaba viciado por el fraude electoral, que permitía al gabinete la manipulación de las elecciones en favor de su propio partido. Dado que las elecciones no significaban una consulta real a la nación, las intervenciones del emperador eran vistas como gestos arbitrarios e ilegítimos para forzar un cambio político. El fraude electoral era facilitado por la escasa dimensión del electorado. Los criterios para la calificación de los electores y el sistema de elección indirecta reducían la cifra de electores a un porcentaje insignificante del total de la población. Sólo los hombres de más de 25 años (a excepción de los militares y de los hombres casados mayores de 21 años) con unos ingresos anuales de 100 milréis podían ser electores. Las mujeres, esclavos y sirvientes (con unas pocas excepciones tales como contables, administradores de haciendas y administrativos) estaban excluidos del electorado. En 1872, el número de electores fue aproximadamente de 200.000, de una población total de 10 millones de habitantes. Era fácil la manipulación de un electorado tan pequeño.

Durante las elecciones, los gabinetes recurrían a toda suerte de maniobras para silenciar a la oposición. Reemplazaban a los presidentes provinciales y funcionarios leales a la oposición por otros que apoyaban al gobierno. Creaban círculos en los lugares donde tenían amigos y los disolvían cuando tenían enemigos. Hostigaban a los votantes miembros de la oposición, amenazándoles con el reclutamiento, y premiaban a los que apoyaban al gabinete con trabajos, promoción y prebendas. Algunas veces llegaron hasta el extremo de movilizar a la Guardia Nacional para intimidar a los electores de la oposición, obligándoles a quedarse en sus casas el día de las elecciones.

En 1842, 1855 y 1860 se pusieron en práctica reformas para intentar eliminar el fraude electoral y para garantizar la representación de la oposición, pero todas ellas fracasaron. Ninguna de esas reformas atacó a la verdadera raíz del problema: el monopolio de la tierra por parte de una minoría de la que dependía la mayoría de la población rural, la marginación de grandes segmentos de la población respecto a los sectores productivos de la economía, y la ausencia de instituciones que pudieran garantizar la independencia de los electores y mediar entre ellos y el gobierno. Y principalmente, las reformas electorales no tocaron las fuentes del sistema de patronazgo y clientelismo, que permitían que una minoría pudiera controlar la nación.

Este control del electorado por parte de una minoría sentó las bases de una fuerte oligarquía, que se perpetuó a sí misma mediante el bloqueo del acceso al poder a todos aquellos que no estaban dispuestos a aceptar las normas del clientelismo. El nombramiento vitalicio de los consejeros de Estado y de los senadores contribuyó a consolidar esta oligarquía. Un hombre que alcanzara el

Senado a la edad de 40 años (el mínimo requerido por la ley) podía permanecer en su escaño durante tres o cuatro décadas. Algunos de los que fueron nombrados a mediados de siglo estaban todavía en el Senado cuando fue derrocada la monarquía, casi 40 años después. Por supuesto había excepciones. Como media, el Senado era renovado cada quince años, pero para los miembros de la Cámara que aspiraran a una posición en el Senado esta espera les debía resultar muy larga.

Los senadores constituían un poderoso grupo que monopolizaba importantes puestos en el Parlamento. Los miembros permanentes del Consejo de Estado eran reclutados en el Senado; y, salvo una única excepción, todos los presidentes del gabinete durante el imperio fueron senadores. Muchos senadores llegaron a presidentes de provincia y más del 40 por 100 de los senadores gozaba de títulos nobiliarios.

Los hombres que habían creado estas instituciones habían confiado en que el nombramiento vitalicio de los senadores les garantizaría una cierta autonomía ante las presiones políticas y electorales. Lo que no habían previsto es que, con el tiempo, esas instituciones carecerían de la flexibilidad necesaria para responder a los cambios que se produjeran en la sociedad. Esto explica por qué la abolición del sistema vitalicio de los senadores y la disolución del Consejo de Estado, o la reducción de su jurisdicción, fueran demandas tan frecuentes en las plataformas reformistas.

Otra fuente de descontento era el desequilibrio entre el poder económico y el político, que se hizo evidente en los últimos años del imperio. Originariamente, el número de representantes por provincia era más o menos proporcional a su población total (incluyendo esclavos), y la concentración demográfica correspondía a la importancia económica y al poder político. El desarrollo económico y el crecimiento demográfico desigual rompieron esta correspondencia y, al final del imperio, las nuevas élites económicas, que estaban concentradas en unas pocas provincias prósperas, se sintieron insuficientemente representadas. Desde el principio, Minas Gerais, la antigua zona aurífera y la provincia más poblada, tuvo la delegación más amplia, con veinte representantes. São Paulo tenía nueve, y Ceará y Río de Janeiro ocho cada una. A finales del imperio, Minas continuaba teniendo el mayor número de representantes y la mayoría de las provincias había aumentado su representación, con la excepción de São Paulo, a pesar de que la producción de café la había convertido en la provincia más rica del país. Hacia finales del imperio, teniendo en cuenta sus recursos, São Paulo, Pará y Río Grande do Sul estaban claramente subrepresentadas en el gobierno.

La preponderancia política de algunas provincias también era evidente en el Senado y en el Consejo de Estado, donde la mayoría de los miembros procedía de Río de Janeiro, Minas y Pernambuco. Además, los senadores no tenían que ser nativos de una provincia o tener su residencia en la misma para poder representarla. Río Branco, un nativo de Bahía, representaba a Mato Grosso en el Senado. Sales Tôrres Homem, un nativo de Río de Janeiro, representaba a Río Grande do Sul. Alfredo de Taunay, también de Río, representaba a Santa Catarina. Cuatro provincias tenían una representación en el Senado casi igual a todas las demás juntas, y también monopolizaban las posiciones en el gabinete. Entre 1847, año en que se creó el cargo de presidente del gabinete o primer ministro, y el final del imperio hubo 30 primeros ministros; 11 fueron de Bahía,

5 de Minas Gerais, 5 de Pernambuco, 4 de Río de Janeiro, 2 de São Paulo, 2 de Piauí y 1 de Alagoas. Entre 1840 y 1889, la mayoría del gabinete procedía de Bahía (57), seguida de Río de Janeiro (47), Minas (35) y Pernambuco (29). Esas cuatro provincias monopolizaron el gobierno central, mientras que otras provincias que se habían desarrollado en las últimas décadas del imperio, como São Paulo, Pará y Río Grande do Sul, tenían una representación en el gobierno relativamente pequeña, por lo que se fue intensificando su insatisfacción por la falta de poder político.

La representación no fue un problema serio hasta que el desarrollo económico empezó a producir intereses contradictorios, y las diferentes élites regionales dejaron de estar de acuerdo en asuntos tales como los aranceles, la política laboral y territorial y los subsidios gubernamentales. El monopolio del poder por una oligarquía que no representaba adecuadamente los intereses de las áreas más desarrolladas del país dio lugar a amargas críticas.

La situación no habría llegado a ser tan crítica si las provincias hubieran gozado de mayor autonomía y si el gobierno central no hubiera ejercido tanto control sobre la nación. Pero la centralización del sistema político permitió a un pequeño grupo de políticos, muchos de ellos con cargos vitalicios, intervenir en muchos y diversos aspectos de la vida del país.

Las provincias eran económicamente dependientes del gobierno central. Las cifras para el año 1868 muestran que el gobierno central recibía de las provincias el 80 por 100 de todas las rentas públicas, mientras que las provincias recibían sólo un 16,7 por 100 y los municipios un 2,5 por 100. Los presidentes de las provincias eran nombrados por el gobierno central. Cuando un gabinete liberal sustituía a uno conservador, o viceversa, el nuevo gabinete reemplazaba inmediatamente a todos los presidentes de las provincias por otros compatibles con la nueva situación política. Esta práctica facilitaba las relaciones entre los gobiernos central y provinciales, pero ocasionaba problemas a nivel local. A menudo, un presidente provincial procedía de otra provincia. Generalmente, su mandato no era lo suficientemente largo como para permitirle crear vínculos locales fuertes, y frecuentemente se desplazaban de una provincia a otra. José Antônio Saraiva, por ejemplo, fue sucesivamente presidente de las provincias de Piauí, Pernambuco, Alagoas y São Paulo. João Lins de Sinimbu fue presidente en Alagoas, Sergipe y Río Grande do Sul. Sin embargo, los presidentes de provincias tenían grandes poderes; el nombramiento de importantes burócratas provinciales, jefes de policía, jueces, el jefe de la Guardia Nacional y el jefe del ejército, dependía del presidente. Esto, indirectamente, daba al gobierno central un gran control sobre las provincias. Mientras los intereses de los políticos que controlaban el gobierno y los de las élites regionales coincidieran, el sistema funcionaba sin conflictos graves; pero cuando el cambio económico y social empezó a producir intereses contrapuestos o competitivos, la situación se tornó tensa. En los últimos tiempos del imperio, los grupos dominantes en Pará y Pernambuco, al igual que los de São Paulo y Río Grande do Sul, se lamentaban de que el gobierno central no hacía lo suficiente para satisfacer sus necesidades. La solución de este problema parecía ser la autonomía provincial; de esta forma, muchos empezaron a ver con buenos ojos al federalismo.

Otra fuente de conflictos en las últimas décadas del imperio fue la interfe-

rencia política del ejército. A los militares les disgustaba su subordinación a los presidentes provinciales y pidieron la creación de una jerarquía militar independiente, subordinada directamente al Ministerio de la Guerra. También se quejaban del hecho de que los ascensos a los altos cargos del escalafón militar dependieran del emperador y del Consejo de Estado. Para los militares que no tuvieran vínculos personales con políticos —y su número fue creciendo en la segunda mitad del siglo XIX—, los ascensos eran casi un sueño imposible. Otra fuente de quejas por parte de los oficiales del ejército fue la práctica de los políticos de usar el reclutamiento militar como instrumento de presión contra la oposición y de favorecer a su clientela con exenciones del reclutamiento militar. Mientras los oficiales del ejército fueron reclutados entre las clases altas la insatisfacción de los militares no constituyó un problema muy serio, pero con la democratización del ejército creció el número de los descontentos. Los nuevos oficiales, sin las conexiones necesarias para que se beneficiasen del sistema de patronazgo, se sintieron cada vez más incompatibles con el sistema.

Tras las guerras contra Argentina, en la década de 1850, y Paraguay, en la de 1860, el ejército no sólo se volvió más democrático, sino también más unido. Los conflictos personales entre oficiales y políticos se convirtieron, entonces, en conflictos entre el ejército y el gobierno. Las guerras sirvieron para demostrar que el ejército estaba mal equipado y desorganizado. Los oficiales culpaban al gobierno de sus fracasos, y cuando en las décadas de 1870 y 1880 un grupo de oficiales decidió mejorar las condiciones del ejército, se encontraron con que las influencias políticas eran el principal obstáculo para alcanzar sus objetivos, volviéndose en consecuencia cada vez más críticos con las instituciones y élites políticas.

El clero, comprometido con la nueva línea agresiva adoptada por Pío IX, compartía algunos de esos sentimientos. La Constitución de 1824 había hecho del catolicismo la religión del Estado, pero al mismo tiempo mantuvo a la Iglesia bajo el control del Estado. El gobierno estaba habilitado para intervenir en detalles insignificantes de la vida de la Iglesia, como la creación o cierre de parroquias, los salarios de los sacerdotes y la adopción de libros de texto en los seminarios. Otros temas de mayor importancia, como la implantación de las bulas papales o la recomendación de obispos al papa, también quedaban a cuidado del gobierno. Durante el imperio, todas esas decisiones, que afectaban íntimamente a la vida de la Iglesia, fueron tomadas por políticos y, a menudo, por razones políticas. La Iglesia, como otras instituciones, estaba atada al Estado y dependía del patronazgo político. Los sacerdotes reformistas, dedicados a una mayor disciplina religiosa, se lamentaban de la mediación de los políticos en los asuntos eclesiásticos. Ello condujo, durante la década de 1870, a un conflicto entre la Iglesia y el Estado.

El gobierno central no sólo interfería en el ejército y la Iglesia, sino que también jugaba un papel relevante en la economía. Legislabo sobre aranceles de importación y exportación, supervisaba la distribución de tierras desocupadas, formulaba la política de mano de obra y la de inmigración y negociaba los créditos. También controlaba los bancos, los ferrocarriles y las sociedades anónimas. Para crear cualquiera de estas sociedades en el país se precisaba el permiso del Consejo de Estado. El gobierno no sólo era el regulador de las empresas

nacionales e internacionales, sino también su protector, autorizando o prohibiendo su funcionamiento, proporcionando subvenciones, garantizando intereses, estableciendo prioridades y concediendo exenciones fiscales. El patronazgo del Estado o, en otras palabras, el patronazgo de los políticos, podía determinar el éxito o el fracaso de las empresas. Los empresarios estaban totalmente a merced de los políticos. Este sistema pudo funcionar sin demasiados problemas mientras hubo relativamente pocas empresas y mientras los empresarios pertenecían a las élites o podían encontrar fácilmente patrocinadores que les proporcionarían conexiones personales. Pero ese sistema de patronazgo y clientelismo empezó a ser ineficaz cuando se multiplicaron los negocios. Por lo tanto, no es sorprendente que hacia finales del siglo hubiera una creciente desaprobación del intervencionismo del Estado en la economía, y, por extensión, del poder oligárquico y las instituciones que lo apoyaban. De hecho, muchos empresarios, como el barón de Mauá, el constructor de ferrocarriles e industrial más destacado de Brasil en el siglo XIX, no hubieran podido sobrevivir sin apoyo gubernamental. Sus éxitos dependían de los aranceles, contratos gubernamentales, concesiones del gobierno, créditos y subvenciones estatales, y, a veces incluso, de la diplomacia del gobierno. El capitalismo en Brasil se desarrolló dentro de la red del clientelismo, y la tensión entre ese sistema y las ideas de la libre empresa no desapareció con el imperio.

Los que controlaban el gobierno central eran reacios a abandonar el sistema de patronazgo porque les permitía dominar a las élites regionales y mantener un férreo control sobre el ejército, la Iglesia y las empresas económicas. El clientelismo era su mejor fuente de poder y prestigio político. Como consecuencia de estas prácticas, los políticos en Brasil eran vistos no sólo como representantes, sino como benefactores, y su poder político dependía de su capacidad para distribuir favores.

Por las mismas razones, las oligarquías se oponían a crear un sistema meritocrático en el servicio público, que hubiera emancipado la burocracia del patronazgo político, como el propio emperador había recomendado. La creación de un cuerpo permanente de burócratas, seleccionado según criterios de méritos y talento, hubiera quitado a los políticos una de sus mayores fuentes de favores. Por eso, los criterios que prevalecieron en la selección de la burocracia fueron la amistad personal y la lealtad al partido. El cambio de partido político en el poder suponía siempre un cambio en la burocracia. Cuando un partido sufría una derrota, los burócratas perdían sus puestos de trabajo de la noche a la mañana. La norma en la burocracia era la persecución del adversario político. Un político que fue nombrado presidente provincial recuerda en sus memorias que los líderes del partido local esperaban de él que enviara a las maestras de enseñanza elemental a localidades remotas, para castigar a sus maridos por haber apoyado a la oposición.⁵ Es fácil imaginar la hostilidad y resentimiento de aquellos que venían sus carreras interrumpidas bruscamente por la intervención de poderosos dirigentes políticos. Hombres totalmente dependientes del patronazgo político llegarían, con el tiempo, a odiar un sistema que daba una tal inseguridad a sus vidas, y a soñar con un sistema que premiara sus méritos y competencia. Pero el patronazgo, y no el talento, iba a continuar siendo el requisito para

5. Alfredo d'Escagnolle Taunay, *Memórias*, Rio de Janeiro, 1960, p. 416.

el éxito. El libre juego de mercado no era suficiente para garantizar la movilidad social. Detrás de cada *self made man* había siempre un padrino. El proverbio, todavía vigente en el Brasil de hoy, de que «el que no tiene un padrino muere pagano» describe muy bien la situación durante el imperio. Los políticos no triunfaban en sus carreras, los funcionarios no ocupaban puestos en la administración pública, los escritores no llegaban a hacerse famosos, los generales no ascendían, los obispos no eran designados, las empresas no se organizaban, sin la ayuda de un padrino.

Las carreras de muchos políticos del imperio muestran que no era su programa el que servía para recomendar a un candidato a sus electores, sino sus contactos y sus asociaciones con figuras poderosas. La carrera política de un joven era una decisión familiar. Sus opciones políticas eran decididas *a priori* por su familia. Y la lucha política era, sobre todo, una lucha entre facciones bajo el liderazgo de familias prestigiosas. Fuera que procedieran de la élite terrateniente —como el barón de Cotegipe, que poseía una plantación de azúcar en Bahía— o de una familia de profesionales —como Paulino José Soares de Sousa, vizconde de Uruguay, cuyo padre era médico, y él mismo un abogado que se había casado con una heredera de una familia de terratenientes de Río de Janeiro—, los políticos frecuentemente representaban en la Cámara, Senado o Consejo de Estado los intereses de propietarios de plantaciones y comerciantes, quienes estaban ligados por vínculos de clientelismo.

Este sistema de alianzas y pactos y la manipulación del electorado favorecieron la creación de dinastías de políticos: los Ferreira França, los Nabuco de Araújo, los Cavalcanti de Albuquerque, los Soares de Sousa. Los padres promocionaban a sus hijos, los tíos a sus sobrinos, y parientes y amigos se apoyaban unos a otros. Joaquim Nabuco decía, hablando de los Cavalcanti, propietarios de la tercera parte de los ingenios azucareros de la provincia de Pernambuco, que ellos —una gran, rica y bien establecida familia, cuyos miembros habían ocupado siempre elevadas posiciones en el gobierno y en la legislatura— tenían la influencia que *debían* tener. Políticos como Nabuco, cuyo propio escaño en el Parlamento era debido a sus conexiones familiares, solían creer que el poder de las grandes familias, como la de los Cavalcanti, derivaba de la «naturaleza de las cosas». Presunciones como ésta sólo podían producir ambivalencia en las mentes de quienes, como Nabuco, más tarde apoyarían la reforma liberal, desafiando a la oligarquía tradicional y a las instituciones políticas del imperio.

Esta ambivalencia sería compartida por otras personas, dado que, como ya se ha señalado, el clientelismo no se hallaba confinado exclusivamente a las carreras políticas. Burócratas, periodistas, escritores, artistas y comerciantes, todos tenían que seguir las reglas del clientelismo. El novelista José de Alencar, caracterizando la situación de la década de 1860, comentaba:

Empresas industriales, asociaciones comerciales, bancos, obras públicas, operaciones financieras, privilegios... todas esas abundantes fuentes de riqueza proceden de las alturas del poder. La burocracia las distribuye entre sus favoritos y las deniega a los que caen en desgracia. Todo depende del patronazgo político, y hasta la prensa precisa de subsidios estatales para subsistir.⁶

6. José de Alencar, *Obras completas*, Rio de Janeiro, 1960, vol. IV, p. 1.097.

La primera generación de intelectuales que alcanzó la madurez en los tiempos de la independencia o en los años inmediatamente subsiguientes fue absorbida casi en su totalidad por el sistema político. Si el mercado para sus libros era limitado, en un país en el que la mayoría de la población era analfabeta, los intelectuales al menos podían sobrevivir gracias al patronazgo político y hacer carrera en la política o en la administración. Así, se convirtieron en representantes, consejeros, senadores, embajadores, funcionarios públicos. Muchos de ellos recibieron títulos nobiliarios. Domingo Gonçalves de Magalhães, considerado como el padre del romanticismo en Brasil, fue miembro de la Cámara, diplomático en Europa, miembro del Consejo de Estado y amigo personal del emperador. Recibió muchas condecoraciones y fue nombrado barón y vizconde de Araguaí. Antonio Gonçalves Dias, uno de los poetas más destacados del período, fue nombrado profesor de latín e historia en el famoso Colégio Pedro II y, posteriormente, enviado a Europa en misión oficial. José de Alencar, el novelista romántico más importante del período, fue miembro de la Cámara, del Consejo de Estado y ministro de Justicia. Y, mientras los políticos organizaban la nación tras la independencia de acuerdo con los modelos constitucionales europeos, esta primera generación de escritores, aunque intensamente nacionalista, importó los modelos europeos e idealizó la realidad brasileña. Refiriéndose a ellos, un escritor de la segunda generación se lamentaba que les faltaba realismo: «Describían selvas sin mosquitos ni fiebres». Sin embargo, paulatinamente, fueron reduciéndose las oportunidades políticas, ya que la mayoría de las posiciones estaban ya ocupadas, y en la burocracia o en la corte sólo quedaban puestos de menor importancia. Con escasas excepciones, los escritores nacidos en la década de 1830, como Bernardo de Guimarães, Casimiro de Abreu, Manuel Álvares de Azevedo —por haber muerto jóvenes o por haber carecido de las oportunidades de la generación anterior—, ni participaron en política ni tuvieron puestos de importancia en la administración. Tampoco pudieron ganarse la vida como escritores. Por ello no es sorprendente que tuvieran la sensación de encontrarse en un callejón sin salida y que adoptaran un estilo bohemio; Byron y Musset fueron sus modelos. Alienados del mundo que les rodeaba —un mundo que se sentían incapaces de cambiar—, se sumergían en sus tormentos personales, se dedicaban incesantemente a la introspección de sus almas, explotaban lo grotesco, o se mofaban de la sociedad.

El crecimiento del mercado de libros, aunque modesto, y la proliferación de periódicos y revistas en la segunda mitad de siglo, abrieron nuevas oportunidades para la carrera literaria. La crítica social y el reformismo militante ofrecían una alternativa a la desesperanza y la soledad. Mientras Álvares de Azevedo se debatía acosado por sus fantasmas personales, Castro Alves encontró en la lucha entre los hombres y la sociedad su fuente de inspiración y se convirtió en el poeta de los esclavos. Esta tercera generación de escritores condenó la retórica, el estilo y los temas de las generaciones anteriores, exigiendo una visión más «objetiva» del mundo. Sus modelos no estaban inspirados en el romanticismo, sino en el realismo y el naturalismo. Los jóvenes novelistas y poetas abandona-

7. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, «Macário», en *Obras completas de Álvares de Azevedo*, 2 vols., São Paulo, 1942⁸, vol. II, p. 66.

ron la retórica parlamentaria, la prosa convencional de los salones, las intrigas de las élites, la idealización del mundo indígena y la desesperanza truca de las generaciones anteriores para centrarse en la vida del «pueblo». En los últimos años del imperio y primeros de la república, Aluísio de Azevedo describía las tribulaciones de la vida en una casa de alquiler; Euclides da Cunha, la rebelión en las tierras del interior. Sílvio Romero recogía cuentos y canciones populares, y condenaba «los libros de historia carentes de ciencia y de pasión, páginas en las que la eterna víctima, el eterno rebelde, el eterno héroe —el pueblo— estaba siempre ausente». Pero las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, entre las tendencias «aristocráticas» y «burguesas», persistían. Hasta cierto punto, esas contradicciones reflejaron la posición del intelectual, pues si bien había un nuevo mercado para las ideas suficiente por lo menos para alimentar sus fantasías de independencia, los intelectuales brasileños continuaban dependiendo del patronazgo de la élite.

Esta dependencia, que, como ya hemos visto, estaba también presente en el mundo de los negocios, la política y la administración, permitía a las clases dirigentes controlar la movilidad social. Entremezclando las divisiones de clase y de color, e incorporando en la élite a los miembros de más talento de las nuevas clases nacientes, el sistema de patronazgo atenuó los conflictos raciales y de clase. Pero el sistema tenía sus propias contradicciones. Afirmaba lealtades, pero generaba resentimientos; podía maniatar al enemigo, pero rechazaba a sus aliados; podía silenciar críticas al sistema, pero transformaba partidarios en oponentes.

Algunos de los arribistas sociales a duras penas podían ocultar su ambivalencia. Otros sobrellevaban en silencio las contradicciones de sus propias situaciones. Luís Gama, un mulato nacido de madre esclava y padre blanco, vendido como esclavo y más tarde emancipado, llegó a ser abogado, militante abolicionista y uno de los fundadores del Partido Republicano en São Paulo. Poeta satírico, Gama se mofaba en sus versos de la élite vanidosa que menospreciaba sus raíces africanas, pero ello no le impidió convertirse en uno de sus miembros. Aunque fuera líder de un partido político que abogaba por deponer a la monarquía, y aunque fuera un abolicionista en una zona controlada por propietarios de esclavos, Gama murió glorificado por la élite. Su funeral fue acompañado por una multitud que abarcaba desde los ex esclavos a los que había ayudado a emanciparse hasta prominentes figuras de la política y de la administración. Si Gama expresaba su malestar en términos satíricos, Machado de Assis, otro mulato, lo ocultaba tras un velo de sutil ironía, mientras desempeñaba conscientemente el papel que se le atribuía en el mundo de los blancos. Como novelista, dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio de los blancos y de sus ansiedades personales, refiriéndose rara vez a los negros o a los esclavos, y manteniendo una actitud de reserva hacia la abolición y la política. Aunque las experiencias de hombres como Machado de Assis y Gama fueran bastante excepcionales, ellos fueron vistos como una evidencia de la eficacia del sistema de patronazgo, y sus vidas alimentaron el mito de la democracia racial y del paternalismo de las élites brasileñas.

8. Sílvio Romero, *Novos estudos de literatura contemporânea*. Rio de Janeiro, 1898, p. 7.

Caracterizando la alianza de las clases dirigentes con hombres de talento, José de Alencar escribía en 1865 que las élites brasileñas estaban constituidas por dos clases de personas: «los hombres ricos en talento pero pobres en bienes y los hombres ricos en bienes pero privados de lucidez». Los primeros, movidos por la necesidad y el amor a la ostentación, escalaban importantes posiciones en la administración; los segundos, ofrecían su apoyo a aquéllos a cambio de consideración y respeto.⁹

Esta alianza de hombres de talento con hombres de poder explica en parte por qué, en la obra de Machado de Assis y otros novelistas, la ética del liberalismo y la ética del favor coexistían codo a codo. Sus novelas fueron escritas desde dos perspectivas contradictorias: por un lado, desde la perspectiva de una ideología burguesa, que abogaba por la autonomía del individuo, la universalidad de la ley, la cultura desinteresada, la devoción al trabajo y la austeridad; y por otro lado, desde el punto de vista de la ética del clientelismo, que cultivaba la dependencia del individuo, que prefería la excepción a la norma, enaltecía el ocio y la ostentación, y validaba la «cultura comprometida». La ambivalente ideología resultante de esta dispar combinación expresaba la experiencia no sólo de los escritores, sino la de muchos brasileños. La coexistencia de una ética de favores con una ética liberal reproducía, en el plano ideológico y en el lenguaje, la experiencia humana de la gente que vivía en una sociedad en la que el capitalismo crecía en el interior de una red de patronazgo y clientelismo. La ideología traducía las contradicciones del *bourgeois gentilhomme* que vivía en Brasil pero tenía a Europa como punto de referencia, que empleaba esclavos para producir para el mercado internacional, que tenía puestos «un ojo en el lucro y otro en la galantería»; una contradicción que existía también en la precaria alianza de intelectuales negros y mulatos con las clases dirigentes, de los empresarios con las oligarquías rurales, de los hombres de modestos orígenes con la élite del poder. La ideología expresaba contradicciones que se infiltraban en la sociedad brasileña de arriba abajo.

Cuando el desarrollo de mercados urbanos, la proliferación de escuelas e instituciones culturales, y el creciente número de lectores, abrieron nuevas oportunidades —aunque todavía limitadas— a empresarios, profesionales, escritores, artistas y políticos que soñaban con emanciparse de las limitaciones del sistema de patronazgo, esos hombres encontraron en el liberalismo los argumentos que precisaban para luchar contra el sistema. Pero su compromiso con el liberalismo no estuvo exento de ambivalencia. Continuaban juzgando el sistema de patronazgo desde el punto de vista del liberalismo, y el liberalismo desde el punto de vista del patronazgo.

Mientras que en Europa las críticas al liberalismo se hacían desde la perspectiva de la clase obrera, en Brasil la carencia de una revolución industrial y de un proletariado, y la supervivencia de relaciones tradicionales de producción en muchas partes del país, hacían que este tipo de críticas, si bien no fuera imposible, al menos sí excepcional. Como consecuencia, mientras en Europa el liberalismo estaba a la defensiva, en Brasil para mucha gente continuaba siendo una promesa por cumplir. Lo que en la década de 1870 estaba detrás de las críticas a

9. José de Alencar, *Obras completas*, vol. IV, p. 1.080.

las instituciones imperiales —unas críticas que expresaban una ingenua creencia en las cualidades redentoras del progreso, la ciencia y las reformas— era la esperanza de que la promesa del liberalismo *pudiera* cumplirse. Sin embargo, paralelamente a esta tendencia hacia la reforma, y a veces dentro de ella, continuaba fluyendo una corriente conservadora que brotaba de la experiencia del clientelismo. La naturaleza contradictoria de este proceso fue captada admirablemente en las novelas de Machado de Assis, en las que los caracteres y el lenguaje cambiaban constantemente de la ética del favor a la del liberalismo.

La arquitectura brasileña de este periodo sugiere aún más claramente las relaciones de los elementos «antiguos» y «nuevos» en la cultura brasileña. En la arquitectura brasileña, lo «antiguo» y lo «nuevo» se yuxtaponían como en Inglaterra, pero de una forma invertida. En Inglaterra, la nueva tecnología se disfrazaba a menudo mediante respetables fachadas góticas o renacentistas. En Brasil, por el contrario, los edificios se seguían construyendo con métodos típicos del periodo colonial, pero los gruesos muros se recubrían con tapices y espejos importados de Europa, y las fachadas se decoraban con ventanas de vidrio que venían a reemplazar a las ventanas moriscas tradicionales. Lo moderno era el detalle, lo que se debía exhibir, el exterior sofisticado que ocultaba las toscas estructuras; tanto en la arquitectura como en la política.

Aunque el desarrollo económico y el cambio social en las últimas décadas del imperio no tuvieron la fuerza necesaria para destruir las estructuras tradicionales, no obstante sí fueron suficientes para crear una insatisfacción cada vez mayor, insatisfacción crecientemente expresada por políticos e intelectuales. En las últimas décadas del imperio, algunos viejos políticos que se sentían marginados por las camarillas de sus partidos, y jóvenes que aspiraban a participar en la política y querían reemplazar «la influencia de la gente por la influencia de las ideas»,¹⁰ como ha señalado un contemporáneo, encontraron en el programa de reforma la palanca que les podría catapultar hacia una carrera de éxito. Esto también fue cierto para muchos intelectuales. «Hoy en día hay dos maneras de conquistar posiciones —decía Alencar en la década de 1860—: los halagos y las críticas, rogar o criticar.»¹¹ Una vez rota la relativa unanimidad de las élites y con nuevos grupos desafiando a las oligarquías tradicionales, la disidencia pasó a ser tan útil para el avance personal como la complicidad. Para la nueva generación de políticos, la reforma ofrecía un electorado; para los intelectuales, un tema. Cuando éstos se comprometieron con la reforma, no sólo expresaban el interés de los grupos sociales de los que descendían o con los que se identificaban, sino también sus necesidades específicas como políticos e intelectuales preocupados en crear su clientela. El cambio económico y social les proporcionó un público presto a recibir con los brazos abiertos las propuestas reformistas. Y cuando políticos e intelectuales adoptaron una retórica reformista, contribuyeron a agudizar aún más el descontento latente, y con eso ganaron nuevos adeptos. Las reformas fueron vistas cada vez más como la solución para todos los problemas sociales.

10. Citado en Sérgio Buarque de Holanda, ed., *História geral da civilização brasileira, II: O Brasil monárquico*, vol. IV, *Declínio e queda do império*, São Paulo, 1971, p. 307.

11. José de Alencar, *Obras completas*, vol. IV, p. 1.074.

Los reformistas tenían su propio vocabulario y sus propios temas. En su retórica, «el pueblo» aparecía siempre junto a otras palabras favoritas, tales como «progreso», «razón» y «ciencia». Pero a despecho de su retórica «populista» carecían de conexiones reales con el pueblo, que ellos preferían proteger antes que representar, y representar antes que permitirle hablar por sí mismo.

Para los reformistas, Europa significaba el progreso, y ser progresista significaba reproducir las modas de las élites europeas. Viviendo en un país dependiente de los mercados europeos, miraban hacia Europa en busca de argumentos y modelos, que no sólo les servían como guías, sino que les conferían prestigio y autoridad. A pesar de la proliferación de instituciones culturales, periódicos y revistas, y del constante crecimiento del número de los que sabían leer, las condiciones para la producción independiente de ideas estaban todavía lejos de ser ideales. La mayoría de la población continuaba siendo analfabeta (78 por 100 en 1872). Existían pocas imprentas y con frecuencia los escritores brasileños tenían que imprimir sus libros en Europa. Existían pocas librerías (a finales de siglo, en São Paulo sólo había cinco) y la distribución interior de los libros era todavía deficiente. Era más fácil importar libros del extranjero que producirlos localmente. Todo esto creaba obstáculos al debate interno de ideas sin el cual no es posible la creación de una cultura relativamente autónoma. «Somos consumidores, no productores de ideas», comentaba Tobias Barreto, destacado intelectual de las décadas de 1870 y 1880.¹²

Los reformistas importaban ideas, pero esta importación seguía siendo selectiva, como lo había sido siempre. Escogían lo que tenía sentido para ellos. Esto explica por qué el socialismo cristiano de Lammenais, el socialismo utópico de Saint-Simon, Proudhon o Fourier, y el socialismo científico de Marx y Engels, eran meramente temas de especulación para unos pocos individuos excéntricos. Hombres como Spencer y Comte, que habían intentado reconciliar orden y progreso, y querían regenerar la sociedad a través de una revolución moral, tenían más atractivo para los intelectuales y políticos brasileños, que otros escritores europeos que confiaban en la lucha de clases o en el proletariado.

Los reformistas de las décadas de 1870 y 1880, colocados entre una oligarquía, a la que querían combatir, y el pueblo, en el que no confiaban, encontraban inspiración en el positivismo. Abandonaron el eclecticismo de Cousin y Jouffroy —que había servido a las élites de la regencia en la década de 1830 y de la conciliación, durante las décadas de 1850 y 1860— para abrazar a Comte y Spencer. Estos autores les ofrecían una doctrina, un método de análisis, una teoría política y, sobre todo, la tranquilizadora convicción de que la humanidad caminaba inevitablemente hacia el progreso y que era posible cambiar la sociedad sin subvertir el orden social.

Ya en la década de 1830, unos pocos brasileños que habían estudiado en París habían traído consigo las ideas de Comte, pero éstas no llegaron a popularizarse hasta los años sesenta. La generación reformista encontró en Comte el apoyo para su programa, que tenía como objetivo reducir el Estado al papel de mero custodio del orden social. El respeto de Comte por las libertades civiles y su compromiso con la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de expresión

12. Tobias Barreto, *Ensaio de sociologia*, Rio de Janeiro, 1962, p. 10.

y la libre empresa no podía sino atraer a los que se lamentaban del sistema político centralista y del patronazgo opresor de las élites. Este grupo de reformistas, bastante conservador, encontró igualmente atrayente el respeto de Comte por la jerarquía social, su conformismo con las desigualdades sociales y su convicción de que la libertad era un derecho, pero la igualdad un mito. En una época en que la mujer empezaba a dar los primeros pasos hacia la enseñanza superior, las ideas de Comte de que la familia era la unidad básica de la sociedad y que la mujer debía subordinarse al marido sólo podían atraer a hombres educados en una sociedad patriarcal que miraba con recelo a las mujeres emancipadas. Además, Comte abogaba en favor de una nueva élite de técnicos y científicos, distinguidos por sus virtudes y conocimientos —una élite que sustituyera la «pedantocracia»: la élite de los literatos que los reformistas identificaban con las oligarquías brasileñas. Nada podía ser más atractivo para ellos que la convicción de Comte de que el nuevo tipo de intelectual —los científicos— tenía un importante papel que jugar en el cambio del mundo. Las ideas de Comte seducían en particular a médicos, maestros, ingenieros, empresarios y estudiantes de la academia militar. De esta forma, salvo unas pocas excepciones —como Farias Brito, seguidor de Hartman y Schopenhauer, Soriano de Sousa, inspirado en el neotomismo, y Tobias Barreto, que devoraba todo lo que podía leer, pero en especial la literatura alemana—, la mayoría de los intelectuales del período se hizo positivista. Hasta aquellos que, como Silvio Romero, más tarde se pasaron a otras posiciones tuvieron su fase positivista. Unos pocos prefirieron el evolucionismo de Spencer, pero la mayoría siguió la versión de Comte según Littré. El interés por estas nuevas ideas creció, codo a codo, con la crítica del sistema y las demandas de reforma.

LAS POLÍTICAS DE LA REFORMA

Durante los primeros años de la década de 1860, un grupo de destacados políticos conservadores —entre ellos Pedro de Araújo Lima (marqués de Olinda), José Tomás Nabuco de Araújo, Zacarias de Góes e Vasconcelos, el marqués de Paranaguá, Sinimbu y Saraiva—, convencidos de la necesidad de reformar el sistema político, abandonaron su partido y se unieron al Partido Liberal, creando la Liga Progresista. El programa de la Liga fue presentado en 1864. Demandaba, entre otras cosas, descentralización, reforma electoral, reforma del sistema parlamentario, un nuevo código civil y cambios en el código comercial, especialmente en las secciones que trataban de las sociedades anónimas y la bancarrota. Con el inicio de la guerra con Paraguay en 1865, la campaña reformista perdió impulso momentáneamente. Pero luego se recuperó, y la presión por las reformas siguió creciendo en el seno del Partido Liberal, de donde surgió una facción más radical. El conflicto entre radicales y moderados dentro del Partido Liberal condujo a la caída del gabinete liberal en 1868. El emperador apeló a los conservadores, que iban a continuar en el poder durante los diez años siguientes. Los liberales se reagruparon y comenzaron a atacar al gobierno y al emperador. En mayo de 1869 publicaron un manifiesto (escrito al parecer por el senador Nabuco de Araújo) que pedía descentralización, autonomía del poder

judicial, la creación de un sistema de enseñanza más independiente del Estado, la transformación del Consejo de Estado en un órgano exclusivamente administrativo, la abolición de los puestos vitalicios en el Senado, elecciones directas, creación de un registro civil, secularización de los cementerios, libertad religiosa, la ampliación del sufragio a los no católicos y la emancipación gradual de los esclavos. El manifiesto terminaba con una amenaza: «reforma o revolución», seguida de una nota conciliatoria: «reforma, y el país será salvado».

A pesar de su tono, el manifiesto liberal no satisfizo a los radicales del partido, y unos meses más tarde éstos publicaron el suyo propio. El nuevo manifiesto pedía: la abolición del poder moderador, de la Guardia Nacional, del Consejo de Estado y de la esclavitud; elecciones para las presidencias provinciales y los jefes de policía; el sufragio universal y elecciones directas. También solicitaba del gobierno que se limitara a administrar justicia, mantener el orden, castigar los delitos y a recaudar los impuestos; es decir, a las funciones de un típico Estado liberal que asegurara la libertad de iniciativa y los derechos civiles. Por todas partes se fundaron círculos radicales. Y, con el fin de la guerra de Paraguay, en marzo de 1870, la oposición intensificó su campaña contra el gobierno. En diciembre se fundó el Partido Republicano en Río de Janeiro, y se publicó un manifiesto en el primer número del periódico *A República*. De los hombres que firmaron el manifiesto, sólo uno era propietario de plantaciones. Los otros se identificaron como abogados (14), periodistas (10), médicos (9), comerciantes (8), ingenieros (5), burócratas (3) y profesores (2). Unos pocos habían militado en el Partido Liberal y habían ostentado importantes puestos en la política y en la administración. En respuesta al manifiesto, algunos círculos radicales se declararon republicanos, y ya como republicanos aparecieron otros nuevos. El manifiesto republicano no añadió gran cosa a los anteriores. Sin embargo hacía una sugerencia importante: la creación de una convención nacional con poderes para cambiar el régimen.

En esencia, los tres manifiestos de 1868-1870 —liberal, radical y republicano— tenían los mismos fines, aunque difirieran en el grado de radicalismo. Intentaban reducir la interferencia del gobierno en el sector privado, aumentar la autonomía provincial y socavar el poder de las oligarquías tradicionales. Sus programas de reforma apelaban a un amplio espectro de intereses: a los burócratas, los jueces y los maestros, cansados de las incertidumbres del sistema de patronazgo, a los hombres de negocios, oprimidos por las políticas gubernamentales, y a los sacerdotes y militares, que condenaban las injerencias políticas en sus instituciones. Apelaban también al inmigrante, que quería regularizar su situación, y a las masas urbanas y rurales, agobiadas por el reclutamiento y los impuestos. Apelaban, especialmente, a la nueva generación de políticos, para los cuales el programa de reformas podía redundar en un crecimiento de su electorado, y a los intelectuales, que encontraron en las reformas nuevas fuentes de inspiración y un público más amplio. Si bien el programa pareció encontrar apoyo principalmente en los nacientes grupos urbanos, también atrajo a los plantadores progresistas y a las élites provinciales, insatisfechas con las políticas gubernamentales. Pero, sobre todo, el programa fue utilizado por los políticos del Partido Liberal para atacar a los conservadores entre 1868 y 1878, período en que aquéllos estuvieron políticamente marginados.

Sin embargo, los temas suscitados por los manifiestos trascendieron los límites de los partidos. Entre los miembros del Partido Liberal había algunos que no compartían las demandas de los más radicales. Y en el Partido Conservador había quienes podrían llegar a apoyar un programa moderado de reforma, y que podían ganar el apoyo de los miembros más reacios de sus partidos, presentando las reformas como un medio de luchar contra la oposición. Esta estrategia se convirtió en una necesidad cuando el propio emperador manifestó sus simpatías hacia algunas de las reformas. En el consejo que dio a la regente, princesa Isabel, antes de su viaje a Europa, el emperador subrayó la necesidad de reformar el sistema electoral, el judicial, la Guardia Nacional y el sistema de reclutamiento y ascensos en el ejército. También sugirió que se debía fomentar la inmigración y emancipar paulatinamente a los esclavos. El emperador fue aún más lejos que los liberales o los republicanos cuando sugirió la creación de una carrera burocrática, que serviría para evitar la manipulación de la burocracia por parte de las élites políticas. En otros temas, sin embargo, adoptó una línea más conservadora. Se opuso a la separación de la Iglesia y el Estado, a la extinción del poder moderador, a la abolición de los puestos vitalicios en el Senado y en el Consejo de Estado y a la descentralización. También desaprobó la concesión de derechos políticos a los extranjeros. El apoyo del emperador a un programa de reformas moderado no hizo sino aumentar la popularidad de las ideas reformistas. Esto explica por qué un gabinete conservador, encabezado por el barón de Rio Branco (1871-1874), implantó una serie de reformas, la más importante de las cuales fue la emancipación de los niños nacidos de madre esclava.

El tema de la emancipación de los esclavos no era nuevo. En la época de la independencia unos cuantos políticos habían ya suscitado sin éxito la cuestión. Bajo presiones de los británicos, el gobierno brasileño prohibió la trata de esclavos en 1831, pero ésta continuó ejerciéndose ilegalmente hasta 1850, año en que finalmente fue reprimida. A finales de la década de 1840 y principios de la siguiente, los plantadores de café, preocupados por el problema de la mano de obra, intentaron utilizar inmigrantes en sus plantaciones. El experimento terminó con una áspera confrontación entre trabajadores y hacendados. Los gobiernos extranjeros protestaron por el mal trato dado a los inmigrantes y algunos prohibieron la emigración hacia Brasil. Después de eso, sólo unos cuantos hacendados obstinados continuaron usando inmigrantes en sus plantaciones. La abrumadora mayoría recurrió a esclavos comprados en las ciudades o en las áreas rurales menos dependientes de la mano de obra esclava. Como resultado, los esclavos fueron desplazados desde áreas de baja productividad hacia áreas de mayor productividad, y desde áreas urbanas hacia áreas rurales. La población esclava del noreste del país fue declinando, mientras aumentaba la de las áreas cafeteras.

Durante las décadas de 1850 y 1860, se presentaron a la Cámara algunas leyes que proponían la emancipación de los esclavos, pero fueron rechazadas. La emancipación encontró un mayor apoyo después de la guerra civil norteamericana. En 1867, el emperador se manifestó en favor de la abolición gradual. El Parlamento rehusó discutir la cuestión. Pero, dos años más tarde, aprobó una

ley que prohibía las subastas de esclavos, así como las separaciones forzadas de marido y mujer, y de los padres de sus hijos menores de quince años. Durante la guerra con Paraguay, fueron emancipados los esclavos pertenecientes al Estado que sirvieran en la guerra (noviembre de 1866), y en 1870 el senador Nabuco de Araújo consiguió que el Senado aprobase un presupuesto que concedía 1.000 contos para la emancipación. Todas estas medidas, aunque pequeñas, eran sintomáticas de la creciente presión abolicionista. La inclusión del tema de la emancipación en el manifiesto liberal y la aprobación del emperador de la emancipación gradual forzaron a los conservadores a debatir el asunto. Incluso antes de que el tema pudiera ser llevado a discusión, dimitieron dos gabinetes conservadores. Rio Branco, llamado por el emperador para formar un nuevo gabinete conservador, decidió en 1871 presentar una ley a la Cámara proponiendo la emancipación de los niños recién nacidos de madre esclava. Durante los debates, los intereses regionales prevalecieron sobre las lealtades partidistas. La oposición procedió principalmente de los representantes de las zonas cafeteras. Hablaron de bancarrota, desórdenes sociales, caos político y de los peligros de una rebelión de esclavos. Algunos incluso llegaron a sostener que la ley sería perjudicial para los esclavos, porque dividiría a las familias y crearía conflictos entre ellos. Y no se les pasó por alto formular las clásicas observaciones sobre la benevolencia de los propietarios y las buenas condiciones de vida de los esclavos en comparación con las de los obreros de las sociedades industriales. Pero el argumento más importante contra la ley fue que era lesiva para el derecho de propiedad. Algunos llegaron al extremo de decir que la ley era idea de los comunistas. Los partidarios de la ley recurrieron a una gran variedad de argumentos. No sólo condenaron la institución en términos morales, sino que argumentaron que la mano de obra esclava era menos productiva que la mano de obra libre. Algunos cuestionaron que el derecho de propiedad pudiera aplicarse a personas. Lejos de basarse en la ley natural, argumentaban, la esclavitud es una «monstruosa violación». Dentro y fuera del Parlamento, la cuestión era debatida con gran ardor. Las peticiones a favor y en contra inundaban el Parlamento, donde los ardientes discursos en favor de la ley eran aplaudidos entusiásticamente desde las galerías. Finalmente, a pesar de la dura oposición, la ley resultó aprobada en la Cámara por 65 votos frente a 45. La ley fue promulgada el 26 de septiembre de 1871, tras haber sido aprobada en el Senado por 33 votos frente a 7.

La ley fue un grave golpe para la institución de la esclavitud, aunque sus efectos sólo llegaron a notarse a largo plazo. Según la ley, los niños recién nacidos de madre esclava serían libres, pero los propietarios de la esclava tendrían que cuidarse de ellos hasta que tuvieran ocho años de edad. Después de ese momento, los amos podían decidirse por entregar los niños al Estado a cambio de una compensación económica, o emplearlos como trabajadores hasta los 21 años.

Tras la aprobación de la ley sobre nacimiento libre, el gobierno se dedicó a otras reformas, y en menos de un año reformó el sistema judicial, la Guardia Nacional (1873), el sistema de reclutamiento (1874), las escuelas militares y las pensiones. También aprobó un aumento de los salarios de los militares, que estaban congelados desde la década de 1850. El gabinete también promovió la expansión de los ferrocarriles, doblando el kilometraje de vías, estableció líneas

telegráficas entre Brasil y Europa y entre las provincias, y subvencionó la inmigración, creciendo el número anual de inmigrantes que entraba al país desde 8.000 a 50.000. Todas esas actividades se vieron favorecidas por un período de extraordinaria prosperidad económica. Pronto, sin embargo, la recesión mundial de 1873 empezó a afectar a Brasil, poniendo fin a esta euforia y provocando la caída del gabinete, que ya se había visto debilitado por un conflicto entre la Iglesia y el Estado.

El conflicto tenía sus raíces en la política de Pío IX para reforzar la autoridad de la Iglesia católica. Las intolerantes opiniones papales en materias de disciplina religiosa y de fe, y su agresiva campaña religiosa, sólo podían conducir a una confrontación entre la Iglesia y el Estado, particularmente en países, como Brasil, en los que la Iglesia estaba subordinada al Estado. La situación se hizo más tensa a partir de la publicación de las encíclicas papales *Quanta Cura* y *Syllabus* (1868), que condenaban muchos aspectos de la vida moderna, y a partir de que el Concilio Vaticano proclamara dogma de fe la infalibilidad del papa (1870).

La nueva línea agresiva del papa fue seguida por muchos sacerdotes brasileños, especialmente algunos curas jóvenes que habían recibido su instrucción en seminarios europeos y habían vuelto a Brasil con un sentido renovado de su misión religiosa. Este clero militante encontró intolerable la subordinación de la Iglesia al Estado. Se lamentaba de la laxitud del clero tradicional que se había acomodado a las reglas del patronazgo político. Los nuevos sacerdotes lucharon por una mayor autonomía para la Iglesia y más disciplina religiosa.

El asunto que desencadenó el conflicto fue aparentemente insignificante. El papa había condenado la francmasonería y prohibido a los católicos hacerse masones. El obispo de Olinda, Dom Vital, actuando independientemente, decidió prohibir la participación de los masones en congregaciones religiosas. Desde el punto de vista del gobierno, esta prohibición sólo podía entenderse como un acto de insubordinación, ya que la Constitución establecía que las bulas papales no tenían validez sin la aprobación del emperador. El conflicto se agravó por el hecho de que, aunque el número de masones era pequeño, muchos políticos importantes eran masones, incluyendo al vizconde de Rio Branco, jefe del gabinete. Muchos sacerdotes también eran masones. Las logias masónicas se resistieron a la decisión del obispo y apelaron al gobierno. El obispo, conminado por el gobierno a retirar sus demandas, se negó. Esto creó un grave dilema. El gobierno estaba obligado a inclinarse ante la ultracatólica posición del obispo, o bien a castigarle por su desobediencia. Tras fracasar en el intento de persuadir al papa para que le doblegara, el gabinete decidió castigar al obispo, quien fue arrestado, juzgado y condenado a prisión en 1874. El conflicto podía haber terminado ahí si otros miembros del clero no hubieran expresado su solidaridad con el obispo. Pero el incidente tuvo repercusiones muy amplias. Hubo manifestaciones a favor y en contra del obispo en las ciudades y en el interior, mientras la prensa y el Parlamento debatían el asunto. El arresto de otro obispo, Antônio Macedo Costa, que había seguido el ejemplo de Vital, y un segundo juicio y condena sirvieron para agravar aún más la situación.

El gabinete conservador no encontró apoyo unánime en sus propias filas.

Dirigentes conservadores importantes, como Paulino José Soares de Sousa, Antônio Ferreira Viana y Cândido Mendes, condenaron los arrestos. Los liberales también estaban divididos. Muchos republicanos se encontraron en la situación de apoyar al emperador y condenar a los obispos. Sin embargo, entre ellos hubo algunos que aprovecharon el incidente para promover la causa republicana, abogando en favor de la separación de la Iglesia y el Estado.

El arresto de los obispos causó un profundo malestar entre los católicos y creó un grave problema al gabinete. Un conflicto que había empezado como un asunto menor sobre los derechos de los francmasones se había convertido en una confrontación entre Iglesia y Estado para la que no había fácil solución. Para el gobierno, la única alternativa era conceder la amnistía a los dos obispos, pero, para que eso pudiera ocurrir, el gabinete de Rio Branco tenía que desaparecer. En 1874, el gabinete fue reemplazado y en 1875 llegó la amnistía; simultáneamente, el papa ordenaba la suspensión de las proscripciones contra los masones. Esto puso punto final al conflicto. No hubo ganadores ni perdedores, pero el número de los que apoyaban la separación de la Iglesia del Estado se había incrementado en ambos bandos, por lo que a largo plazo la monarquía salió perdiendo. Años más tarde, pocos meses después de la proclamación de la república, D. Antônio Macedo Costa pudo decir, triunfante, en una pastoral: «El trono ha desaparecido ... ¿Y el altar? El altar permanece».¹³

La historiografía tradicional ha atribuido a este conflicto un gran papel en la caída de la monarquía, ignorando el hecho de que la nación había estado dividida sobre este asunto. Además, la posición adoptada por el Consejo de Estado contra los obispos representaba la opinión de la mayoría de los grupos de la elite. De hecho, salvo notables excepciones, las elites brasileñas habían cultivado siempre una postura anticlerical, y muchos de ellos alardeaban de librepensadores. Esta fue también la actitud del emperador, a quien disgustaba el ultracatolicismo del obispo. Incluso la Iglesia estuvo dividida durante la crisis; muchos sacerdotes habían continuado apoyando los derechos del patronazgo real. Por esas razones, no debe sobreestimarse el papel de la llamada *questão religiosa* en la caída de la monarquía.

Si bien el Estado fue duro con los sacerdotes, en cambio fue más generoso con otro grupo descontento: los militares. Las quejas de los militares contra el sistema político tenían una larga historia que se remontaba a la década de 1850. Pero en esa época muchos militares estaban más o menos adaptados al sistema de patronazgos, pues los había que estaban afiliados a partidos políticos. Unos pocos generales famosos llegaron a participar en los gabinetes. La guerra contra Paraguay había puesto al descubierto la debilidad del ejército brasileño y muchos oficiales reconocieron que era necesario incrementar la eficacia del ejército. En 1874, un joven oficial, Sena Madureira, tras viajar a Europa presentó al ministro de la Guerra algunas sugerencias para la reorganización del ejército. Entre otras cosas, propuso un nuevo sistema de reclutamiento y ascensos basado en los méritos y nuevos tipos de instrucción. Sus ideas eran compartidas por muchos oficiales jóvenes. Los oficiales partidarios de la reforma fundaron periódicos,

buscaban candidaturas a puestos electivos y publicaron sus quejas en la prensa nacional. Muchos de ellos eran conscientes de que la interferencia política en el ejército era un obstáculo para su modernización. En su fucha, los militares desarrollaron una nueva forma de solidaridad que trascendía las líneas políticas tradicionales de los partidos. Buscaron apoyo entre otros grupos sociales igualmente interesados en la reforma política del sistema y empezaron a identificar cada vez más como a enemigos a las oligarquías tradicionales. Su resentimiento se expresó en su creciente interés por el positivismo y las ideas republicanas.

El gobierno central tomó algunas medidas, en un intento por satisfacer sus demandas. Incrementó los salarios, cambió el sistema de enseñanza de los oficiales, haciéndolo más especializado, y en 1874 aprobó una nueva ley de reclutamiento. En 1875, el gobierno cambió también el sistema de ascensos y estipuló que el servicio en el frente contara doble para los ascensos o retiros. Sin embargo, muchas de esas reformas nunca llegaron a convertirse en realidad. La recesión de 1873 aplazó la subida de los sueldos, tan esperada desde hacía diez años. Y en 1876, Sena Madureira denunció las tácticas utilizadas por las elites para evitar el reclutamiento de los miembros de sus familias o de su clientela. Con el paso del tiempo, el abismo existente entre las oligarquías y los militares se ampliaría. El nombramiento, en 1875, del duque de Caxias, comandante del ejército brasileño durante la guerra de Paraguay, como primer ministro, y la presencia de otros dos populares generales (Osório y Pelotas) en los gabinetes liberales subsiguientes, pospuso la crisis durante unos pocos años. Pero el conflicto volvió a surgir en la década de 1880 con consecuencias dramáticas para la monarquía.

En 1878, los conservadores fueron finalmente desalojados del poder tras diez años de gobierno. El debate sobre la reforma electoral causó la caída del gabinete. En 1876 se había aprobado una reforma electoral que intentaba garantizar la representación de la oposición y reducir la intervención gubernamental en las elecciones. Pero la reforma tenía un fallo. En las primeras elecciones sólo habían salido elegidos 16 liberales, en lugar de los 25 estipulados por la ley como mínimo. Los conservadores habían obtenido el 85 por 100 de los escaños en la Cámara. La oposición reabrió nuevamente el tema, proponiendo un sistema de elecciones directas.

Después de diez años, los liberales podían sostener que muchas de las reformas puestas en práctica por los conservadores habían sido meros paliativos. Pero las reformas que parecían insuficientes a la oposición liberal eran consideradas demasiado radicales por muchos conservadores. En 1878, el Partido Conservador estaba dividido en los asuntos fundamentales, al igual que lo había estado el Partido Liberal en 1868. Esas divisiones revelaban los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad y el surgimiento de grupos de intereses conflictivos en ambos partidos. En esas condiciones, los gabinetes tenían cada vez más dificultades para obtener el apoyo unánime de sus miembros en la Cámara. Así, aunque algunos conservadores importantes, como Paulino Soares de Sousa, Ferreira Viana y Francisco Belisário, estuvieran a favor de la reforma electoral,

13. Joaquim Nabuco, *Um estadista do Império*, Rio de Janeiro, 1975, p. 830.

el emperador, consciente de la amplia brecha que existía en el Partido Conservador, llamó a los liberales a formar nuevo gobierno.

Tras diez años de ostracismo político, los liberales retornaban al poder con un programa que no difería mucho del programa de los conservadores. Proponian ampliar las líneas de ferrocarril y de telégrafo, poner en práctica mejoras urbanas en Río de Janeiro, subvencionar la inmigración, ampliar la red de enseñanza elemental y promover la reforma electoral. Las nuevas elecciones llevaron a la Cámara a un grupo de jóvenes políticos —incluyendo a Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Afonso Pena y Rodolfo Dantas— que se convertirían en figuras políticas importantes en las últimas décadas del imperio y durante la primera república.

Los debates sobre la reforma electoral pusieron de manifiesto las profundas grietas que existían en el seno del Partido Liberal, entre los moderados y los radicales. Esta división llevaría, finalmente, a la dimisión del gabinete liberal. Sin embargo, la causa inmediata fue la *revolta dos vintens* en Río de Janeiro, en enero de 1880 (ya mencionada anteriormente). Por primera vez, un movimiento popular derribaba un gobierno. Era el inicio de una nueva era. Y no fue casual que uno de los temas más controvertidos durante los debates sobre la reforma electoral fuera el del voto de los analfabetos. La segunda cuestión que desencadenó intensos debates fue la concesión de derechos políticos a los no católicos, medida que los políticos interesados en agradar a los inmigrantes estaban deseosos de ver aprobada.

Una vez más, como durante el debate sobre la ley de emancipación de los niños nacidos de madre esclava, o durante la confrontación entre Iglesia y Estado, no había cohesión de partido. Hubo conservadores a favor y en contra de la ley de reforma electoral, y lo mismo ocurrió con los liberales. La ley que se aprobó finalmente fue un compromiso. No concedía el sufragio a los analfabetos, pero sí a los no católicos, a los libertos y a los extranjeros naturalizados. Abolió las elecciones indirectas, pero mantuvo los requisitos de ingresos mínimos para la calificación del electorado. Se permitiría votar a todos los hombres mayores de 21 años que mantuvieran unos ingresos netos superiores a 200 mil-réis y supieran leer y escribir. Una de las innovaciones importantes fue el certificado de votante, que eliminaba ciertos tipos de manipulación en el proceso de registro.

La reforma tuvo un resultado curioso. La eliminación de las etapas características del sistema indirecto de elección —fijando los ingresos mínimos en 200 mil-réis, y estableciendo el requisito de que el votante supiera leer y escribir— redundó en una reducción del número de los que podían votar. Antes de la reforma, el número registrado de votantes era de 1.114.066, y el de electores, de 240.000. Con la institucionalización de las elecciones directas, el número de los que podían votar bajó a 145.296, aproximadamente el 1 por 100 de la población total. Al mismo tiempo el poder político se desplazó ligeramente de las áreas rurales a las urbanas, donde el grado de alfabetización y los ingresos eran superiores.

Las esperanzas de los que habían apoyado la reforma parecieron confirmarse en 1881, cuando fueron elegidos 75 liberales y 47 conservadores. Por primera vez la oposición tenía una significativa representación en la Cámara. En los años

siguientes, sin embargo, sus efectos positivos fueron menos claros. En 1884, fueron elegidos 67 liberales, 55 conservadores y 3 republicanos. Pero en las elecciones que hubo en 1885, con un gabinete conservador, solamente fueron elegidos 22 liberales de un total de 125. Para entonces ya se había hecho evidente que la reforma electoral había vuelto a fracasar una vez más, con respecto a la corrección del fraude electoral. Los prometedores resultados de las primeras elecciones tras la reforma fueron debidos a la integridad del gabinete que los había apoyado. Cuando los conservadores tomaron el poder no sintieron el mismo compromiso hacia las reformas y ganaron las elecciones por una abrumadora mayoría. Una vez más, la legislación no había atacado a fondo las raíces del problema, y el voto continuó controlado por el dinero, el prestigio y las conexiones familiares. Y cuando éstas fallaban, la violencia seguía siendo una estrategia útil. Con todo, la política de opinión proseguía haciendo lentos progresos, suscitando debates sobre la centralización, la abolición del Senado y del Consejo de Estado, la inmigración, la política financiera y la abolición de la esclavitud. Aunque siguiera siendo cierto que el apoyo del líder local era más útil para un candidato que su plataforma política, el surgimiento de un nuevo segmento electoral urbano y la ruptura del consenso entre las elites crearon las condiciones para un nuevo tipo de política. En 1884, el líder abolicionista Joaquim Nabuco fue de casa en casa para conseguir el apoyo de los votantes en Recife.

La crisis económica de la década de 1880 trajo consigo nuevos temas de debate y acentuó el conflicto político. Los liberales habían heredado una difícil situación económica. La expansión de la red ferroviaria y de las líneas telegráficas, los subsidios concedidos a la inmigración, la centralización de los ingenios azucareros y la ayuda prestada a la población del noreste, devastada por una serie de sequías durante la década de 1870, habían representado una tremenda carga financiera para el Estado. Durante ese período, el gobierno había contratado muchos créditos y sólo la deuda externa absorbía la mitad del total de las rentas recaudadas por el Estado. Los gastos gubernamentales eran mayores que los ingresos, a pesar del crecimiento de las exportaciones de café y caucho. La situación se hizo aún más difícil en los primeros años de la década de 1880, debido a la caída de los precios de los productos brasileños en el mercado internacional. El gabinete liberal que subió al poder en 1881 se vio obligado a posponer el programa de reformas para poder enfrentarse a una cuestión más urgente: el déficit galopante. Simultáneamente tenía que atender a la demanda de más crédito.

Como era inevitable, la recesión sacó a la luz conflictos de intereses. Dado que los grupos vinculados a la exportación —desproporcionadamente representados en el gobierno— se oponían a los impuestos sobre las tierras y sobre las exportaciones, la alternativa era elevar la carga tributaria de las importaciones. Pero eso resultaba gravoso para los importadores y los consumidores. Reducir los gastos del Estado —la otra alternativa disponible— suponía congelar importantes proyectos para el desarrollo de la infraestructura económica. El gobierno estaba en un callejón sin salida. La solución a corto plazo era, como de costumbre, recurrir a los préstamos o emitir moneda. En un caso o en otro, sólo se

conseguiría agravar el déficit a largo plazo. Los gabinetes liberales, agobiados por los problemas financieros y socavados por los conflictos entre las alas radical y conservadora de su propio partido, carecieron de estabilidad. Uno tras otro, entre 1882 y 1884, se sucedieron cuatro gabinetes liberales, incapaces de asegurarse la mayoría en la Cámara.

Con la única excepción de la reforma electoral, la mayoría de las demandas liberales de 1869 estaba todavía por conseguir. Cada uno de los nuevos gabinetes había anunciado su intención de garantizar la independencia judicial, descentralizar la administración, dar mayor autonomía a las provincias, ampliar la red de escuelas públicas y equilibrar el presupuesto. Pero, a excepción de la expansión de la escuela pública, el resto del programa había fracasado.

Este fracaso fue debido, en parte, al poco interés de los liberales en poner en práctica las reformas que habían propuesto cuando estaban en la oposición. Los liberales, una vez alcanzado el poder, y con la sola excepción de su ala más radical, no querían ir mucho más lejos que los conservadores. Martinho Campos, el jefe del nuevo ejecutivo en 1882, decía, correctamente, que no había nada más parecido a un liberal que un conservador, o, incluso, un republicano.¹⁴ De hecho, todos tenían un cierto parecido familiar. Las diferencias ideológicas eran mínimas o irrelevantes. Los políticos se parecían a uno de los personajes de Machado de Assis, quien, en su intento por consolar a un político derrotado, trataba de convencerle de que podía cambiar de partido. «Su relación con ellos —decía— es como la que se tiene en un baile, en donde no es preciso tener las mismas ideas para bailar el mismo baile.»¹⁵

Un análisis cuidadoso de la composición de los partidos revela que los grupos agrarios (*fazendeiros*) correspondían a la mitad, aproximadamente, de cada uno de los dos partidos, mientras que la otra mitad estaba formada por burócratas y profesionales, con un predominio de los burócratas en el Partido Conservador y de los profesionales en el Partido Liberal.¹⁶ El predominio de los burócratas en el Partido Conservador no es sorprendente, dado que los conservadores habían estado en el poder más tiempo que los liberales y habían tenido más oportunidades de controlar los nombramientos burocráticos. Pero, teniendo en cuenta la inestabilidad de la burocracia y su composición, la mayoría de ellos profesionales, es posible concluir que de hecho los dos partidos representaron y tuvieron el apoyo de los mismos grupos sociales. Las diferencias entre liberales y conservadores eran esencialmente retóricas. Tanto fue así que, una vez en el poder, los conservadores llevaron a cabo muchas de las reformas propuestas por los liberales, y cuando el poder estuvo en manos de los liberales, éstos no llegaron más allá de los límites aceptados por la mayoría de los conservadores. Además, en ambos partidos hubo rivalidades internas entre moderados y radicales, como ya hemos visto. Los sectores moderados tendían a representar los intereses de las élites agrarias tradicionales y los otros representaban a los nue-

14. Archivo Nacional, *Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do império*, Rio de Janeiro, 1962, p. 196.

15. Machado de Assis, *Esau e Jacó*, São Paulo, 1961, p. 181.

16. José Murilo de Carvalho, «A composição social dos partidos políticos imperiais», *Cadernos DCP* (1974), p. 15.

vos grupos de intereses emergentes, incluso sectores agrarios que se modernizaban. Después de la caída del gabinete de Rio Branco, esta división interna contribuyó a una gran inestabilidad política. Entre 1880 y la caída del imperio, se formaron y disolvieron diez gabinetes; los siete primeros (1880-1885) fueron liberales. La Cámara fue disuelta en tres ocasiones y el gobierno convocó nuevas elecciones. Durante este período, ninguna de las legislaturas logró completar su mandato.

Como resultado de la inestabilidad política, a menudo se pidió la intervención del emperador en la escena política. La intervención constante del poder moderador provocó resentimientos y críticas, que acabaron por llevar al sistema político a una crisis. Hasta las élites políticas tradicionales empezaron a cuestionar el sistema. Los partidos monárquicos no escatimaron críticas al régimen monárquico que supuestamente defendían. El poder moderador era el blanco principal de sus críticas. Las palabras de un político experto, Ferreira Viana, en el Senado el 31 de julio de 1884 expresaban el estado de ánimo de muchos de sus colegas: «Estoy cansado de actuar en esta comedia política».

Muy pronto los políticos iban a enfrentarse con una prueba difícil. La presión abolicionista volvió a llevar al Parlamento la cuestión de la abolición. Los políticos más conservadores habían confiado en que la ley de 1871 resolvería el problema de la abolición de la esclavitud. Pero, como argumentaba un ardoroso abolicionista, si no se hacía nada para acelerar el proceso, los brasileños de la tercera o cuarta década del siglo XX continuarían teniendo esclavos. Esto no parecía preocupar demasiado a la mayoría de los diputados. Ni aun con los liberales, cuando volvieron al poder en 1878, los intentos de discutir el problema encontraron apoyo. Un proyecto de ley presentado por Nabuco fue rechazado por 77 votos, con sólo 16 votos a favor. Y al año siguiente, Nabuco, que ni siquiera pudo obtener el apoyo total de su propio partido, no fue reelegido. Entretanto, la campaña abolicionista fuera del Parlamento ganaba nuevos aliados.

Varios factores sirven para explicar el progreso de la campaña abolicionista y el replanteamiento de la cuestión en el Parlamento. No solamente había menos gente que siguiera dependiendo de los esclavos, sino que, además, los que seguían dependiendo de ellos estaban cada vez más convencidos de la necesidad de buscar alternativas. Los plantadores sólo podían ampliar sus plantaciones de café si disponían de suficiente mano de obra, pero la población esclava iba disminuyendo: de 1.566.416 esclavos en 1873 a 1.346.097 en 1883, y de 1.133.228 en 1885 a 723.419 en 1887. La población esclava decrecía más rápidamente en el noreste que en el sur, donde tenía tendencia a concentrarse, pero, incluso ahí, iba disminuyendo en términos relativos. En São Paulo, los esclavos representaban el 28,2 por 100 de la población total en 1854, y el 8,7 por 100 en 1886. Y dado que esta población esclava no se renovaba, iba envejeciendo. El reconocimiento del hecho que tarde o temprano desaparecerían los esclavos obligó a los plantadores a buscar alternativas. En una reunión que tuvo lugar en 1878, algunos plantadores sugirieron el uso de inmigrantes chinos. Pero esta sugerencia no fue bien acogida por la mayoría de los plantadores, que prefería utilizar la población rural libre de Brasil o europeos. La solución que prevaleció por fin fue esta última. La asamblea provincial de São Paulo aprobó muchos proyectos de ley para subvencionar la inmigración, y, entre 1875 y 1885, entraron en la

provincia 42.000 inmigrantes, predominantemente italianos y portugueses. Durante los dos años siguientes llegaron otros 114.000. Sin embargo, hasta el inicio de la década de 1880, la mayoría de los plantadores seguía todavía dependiendo casi exclusivamente de la mano de obra esclava. En el noreste, la población que huía de las sequías de la década de 1870 se concentró en las áreas de plantación de caña de azúcar, ofreciendo a los plantadores una mano de obra barata.

Los cambios en el sistema de producción de azúcar y café y las mejoras en los medios de transporte facilitaron a los plantadores la utilización de mano de obra libre. Aumentó la productividad y se pudo racionalizar el sistema de trabajo. En algunas circunstancias la mano de obra libre podía incluso ser más provechosa que la esclava. Al proceso de transición de la mano de obra esclava a la mano de obra libre siguió también la apertura de nuevas oportunidades de inversión. Los bancos, los ferrocarriles, las mejoras urbanas, las compañías de seguros y los fabricantes ofrecían alternativas para la inversión de capital. Y aun en el caso en que esas inversiones alternativas no pagasen más que la inversión en esclavos, el hacendado podía protegerse de las inseguridades de la agricultura mediante la inversión en ferrocarriles, bancos y otras empresas. La necesidad de diversificar las inversiones se hizo evidente a principios de la década de 1880, momento en que los precios del café descendieron bruscamente. En estas circunstancias, la mano de obra libre podía llegar a ser incluso más lucrativa que la esclava, dado que no requería la inmovilización de capital. Además, el precio de los esclavos y el coste de su manutención se habían incrementado en la década de 1870, hasta tal extremo que, en algunas zonas, la mano de obra esclava resultaba más cara que la mano de obra libre. Sin embargo, aunque a finales del siglo XIX todo pareciera apuntar en dirección al uso de mano de obra libre, la mayoría de plantadores seguía oponiéndose a la abolición de la esclavitud, puesto que no sólo los esclavos representaban un capital ya invertido, sino que los plantadores seguían dependiendo del trabajo esclavo y eran escépticos sobre las posibilidades de sustituirlo por trabajadores libres. Los levantamientos de inmigrantes en las principales áreas de plantación de café habían demostrado que estos hombres eran más difíciles de manejar que los esclavos.

Mientras los plantadores se atormentaban con el problema de la mano de obra, los abolicionistas iban progresando, especialmente en las ciudades, y gradualmente se fueron convirtiendo en una fuerza política. En 1884 la esclavitud fue abolida de hecho en las provincias de Ceará y Amazonas. En São Paulo, el abogado Antônio Bento organizó un sistema clandestino con el apoyo de artesanos y trabajadores del ferrocarril, negros y mulatos en su mayoría, para ayudar a los esclavos fugitivos. Un gran número de esclavos estaba huyendo de las plantaciones. Los esclavos habían desarrollado una nueva conciencia gracias a la ideología y estrategia que les había proporcionado el abolicionismo. Los abolicionistas también habían logrado cambiar la opinión pública sobre este asunto, y los actos de insubordinación, que existían desde los inicios de la esclavitud, habían adquirido un nuevo significado. Antiguamente las fugas de esclavos habían sido perseguidas, pero en ese momento encontraban un apoyo creciente. La población urbana, que en el pasado había perseguido a los esclavos fugados, empezaba a desafiar a la policía que los arrestaba. Los jueces y abogados exigían el cumplimiento de la ley que protegía a los esclavos y se mostraban

indulgentes en la ejecución de las leyes represivas. Tanto la prensa abolicionista como la antiabolicionista, aunque por razones diferentes, propagaban rumores de rebelión de esclavos; los abolicionistas con la intención de subrayar la violencia de un sistema que llevaba a los hombres a una desesperación tal, y los antiabolicionistas para enfatizar la necesidad de mayor represión. Los propietarios de esclavos recurrían a cualquier medio para luchar contra la campaña abolicionista. Atacaban a los oradores abolicionistas, acosaban a los líderes abolicionistas en sus comunidades, protestaban en la prensa contra un gobierno incapaz de controlar el orden social y desbordaban el Parlamento con peticiones. El ingeniero francés Louis Couty, en su visita a São Paulo en 1883, tuvo la impresión de que el país estaba al borde de una revolución social.

Y fue precisamente en ese clima de entusiasmo de parte de los abolicionistas y de angustia de parte de los plantadores que el emperador llamó al liberal Souza Dantas para formar un nuevo gabinete en 1884. En el programa que presentó al Parlamento, Dantas definió su posición respecto a la emancipación de los esclavos: «Ni volver atrás, ni detenerse, pero no precipitarse ... marcar la línea que requiere la prudencia y la civilización recomienda». Propuso un proyecto de ley para emancipar, sin compensación, a los esclavos que hubieran cumplido los 60 años. El proyecto provocó una crisis de grandes proporciones que condujo finalmente a la caída del gabinete liberal y su sustitución por uno conservador. Una vez más el tema trascendía las lealtades partidistas y en la Cámara se pudieron ver conservadores y liberales a favor o en contra del proyecto. Diecisiete liberales —tres de São Paulo, uno de Río, seis de Minas y siete de otras provincias— votaron contra el gabinete. El recuento final fue de 55 votos en contra del gabinete y 52 a favor. La oposición al proyecto de ley provino principalmente de las áreas cafeteras (de los 41 diputados de esas áreas, sólo 7 votaron a favor del gabinete). La Cámara fue disuelta y el gabinete convocó nuevas elecciones.

En el país nunca se había visto una campaña electoral tan disputada. Hombres de negocios, banqueros y plantadores se reunían en los clubes de Lavoura e Comércio (Asociaciones de Comercio y Agricultura) y acusaban a los abolicionistas de ser elementos subversivos que amenazaban al país con la desorganización económica y el caos político. «Los abolicionistas son como aquellos que pertenecen al partido nihilista en Rusia, en Alemania son socialistas y en Francia, comunistas», recalcaba un diputado en la Cámara. Por su parte, los abolicionistas promovían actos públicos y campañas en la prensa, argumentando que la esclavitud inhibía el desarrollo industrial y la innovación de los métodos agrícolas, causaba la inestabilidad de las fortunas y la desorganización familiar, desencadenaba el odio racial, desmoralizaba a la mano de obra y colaboraba en mantener a la población libre en la ignorancia y la pobreza. Pero, sobre todo —y este era un argumento decisivo— constituía un obstáculo para el progreso.

Las elecciones llevaron al Parlamento a 67 liberales, 55 conservadores y 3 republicanos. Fueron reelegidos 38 diputados que habían apoyado el proyecto de ley y 18 que se habían opuesto a él. Parecía que el gabinete había vencido. Pero, de hecho, las elecciones habían introducido en la Cámara a muchos otros que se oponían al proyecto de ley, y algunos que, como Nabuco, habían luchado por él, tuvieron dificultades para ser reelegidos. Al inicio de la nueva sesión, un

diputado por São Paulo propuso una moción de censura al gabinete, y la votación terminó en empate. Tres semanas más tarde se hizo evidente que el gabinete no podía gobernar. Se votó una nueva moción de censura, y esta vez el gabinete tuvo la oposición casi unánime de los conservadores (votaron en contra todos menos tres), mientras que nueve liberales votaban con la oposición. El emperador llamó a otro miembro del Partido Liberal para que constituyera un nuevo gabinete, con la esperanza de que tal cambio pudiera asegurar al Partido Liberal la mayoría en la Cámara. Pero, una vez más, se hizo evidente que los liberales no disponían del apoyo suficiente para gobernar. Finalmente, en 1885, el emperador llamó al conservador Cotegipe para formar un nuevo gobierno. Con la vuelta de los conservadores al poder, por fin, se aprobó un proyecto de ley más moderado que el original, que se convirtió en ley en septiembre de 1885. Esta ley emancipaba a los esclavos mayores de 60 años, pero, como compensación a sus propietarios, les obligaba a realizar otros tres años de trabajo no remunerado o hasta que alcanzaran la edad de 65 años.

Durante los cuatro meses de debates se había producido un cambio fundamental en la posición de uno de los más importantes dirigentes conservadores de las áreas cafeteras. Antônio Prado, que se había opuesto sistemáticamente a la legislación emancipadora, prestó su apoyo al proyecto de ley. Explicó a la Cámara que las indemnizaciones no serían necesarias si se permitía a los plantadores conservar a los esclavos hasta que pudieran sustituirlos por mano de obra libre. Según explicó, los paulistas eran conscientes de las ventajas de la mano de obra libre y estaban tomando las medidas necesarias para resolver el problema. Este cambio de opinión no sólo estaba relacionado con la creciente desorganización del trabajo, provocada por las fugas de esclavos de las plantaciones, sino también con las nuevas perspectivas para la inmigración.

Mientras algunos plantadores se decidían por los inmigrantes, otros resolvían que, para evitar las fugas de esclavos, debían concederles la libertad condicional. Emancipaban a sus esclavos con la condición de que debían permanecer en la plantación un cierto número de años. En 1887, el número de manumisiones en São Paulo creció hasta 40.000 y la Asamblea provincial envió al Parlamento una petición de abolición inmediata. Los plantadores habían llegado a la conclusión de que la abolición era el único medio de evitar la agitación social. Esto último se evidenció aún más en el momento en que el ejército remitió a la princesa una petición de que fuese relevado de las tareas de persecución de esclavos fugados.

Cuando se reanudó la legislatura en 1888, el nuevo primer ministro, João Alfredo Correia de Oliveira, anunció su intención de abolir la esclavitud sin compensación, y el proyecto de ley fue aprobado sin retrasos, convirtiéndose en ley el 13 de mayo de 1888. Sólo nueve diputados votaron en contra; ocho de ellos eran de Río de Janeiro —un área en la que las plantaciones de café estaban en recesión y los plantadores agobiados por hipotecas. Al contrario de lo que habían predicho los agoreros, la economía no se vio dañada por la abolición de la esclavitud, sino que se recuperó rápidamente del desgarro momentáneo. Sólo unos pocos plantadores, cuyas plantaciones ya estaban en situación crítica anteriormente, fueron a la bancarrota, pero no la nación.

La abolición no cambió fundamentalmente las condiciones de trabajo en la plantación. En las zonas cafeteras, los inmigrantes que reemplazaban a los esclavos

vos se encontraban a menudo con que la vida en la plantación no era tan idílica como habían creído, y se trasladaban hacia las ciudades o retornaban a su país de origen o emigraban a otros países. Pero la llegada constante de nuevos inmigrantes suministraba la mano de obra que los plantadores necesitaban para ampliar sus plantaciones. Muchos ex esclavos permanecieron en las plantaciones y continuaron realizando sus tareas habituales, por las que recibían mezzquinos salarios. Otros, que se desplazaron a las ciudades, se dedicaban a tareas menores, permaneciendo en el estrato más bajo de la sociedad. Los abolicionistas parecían haberse olvidado de los negros.

Como había ocurrido con otras reformas promovidas durante este periodo —la reforma electoral, la reforma de la ley de reclutamiento, la reforma de la Guardia Nacional—, los resultados de la abolición no respondieron a los temores de los conservadores ni a las esperanzas de los reformistas. Sin embargo, fueron suficientes para producir frustración entre los partidarios de la monarquía, que no perdonaban al gobierno la abolición de la esclavitud sin compensación. Si bien la abolición no sirvió para aumentar el número de militantes del Partido Republicano —como han sugerido algunos historiadores—, sí sirvió para ayudar a socavar el sistema monárquico. El emperador fue criticado por todas las facciones durante la campaña. Para los abolicionistas radicales, como Silva Jardim, el pecado del emperador fue no haber intervenido más drásticamente en favor de la abolición; para los antiabolicionistas, su pecado fue haber hecho demasiadas concesiones.

La abolición llegó en 1888, tras una tumultuosa campaña popular. El año siguiente, la república se implantaría a través de un golpe de Estado que resultaría de una conspiración que aglutinaría a los miembros del Partido Republicano de São Paulo y Río con ciertos oficiales del ejército.

Los republicanos habían hecho progresos desde 1870. Al principio formaban un grupo pequeño. El núcleo original del Partido Republicano en Río estaba formado por unas 30 personas. El diario *A República* había empezado con una tirada de 2.000 ejemplares en su primer año de existencia, pero para fines de año ya se vendía en Río, Alagoas, Pernambuco, Río Grande do Sul, São Paulo y Minas Gerais. La tirada aumentó rápidamente y dos años más tarde alcanzaba los 12.000 ejemplares. En diversas provincias aparecieron círculos republicanos, aunque había más abundancia de ellos en Río de Janeiro, São Paulo, Río Grande do Sul y Minas Gerais. En 1889, el 79 por 100 de los diarios y el 89 por 100 de los círculos se localizaban en esas áreas.

El Partido Republicano había reclutado sus partidarios principalmente entre la población urbana. El núcleo del Partido Republicano en Río, Minas Gerais y Río Grande do Sul estaba formado por estudiantes y profesionales, y unos pocos industriales. Sin embargo, en São Paulo, la mayoría de los republicanos poseía plantación. Aunque se haya dicho que sólo el 30 por 100 de los miembros del Partido Republicano era propietario de plantación, mientras el 55 por 100 era profesional y el 11 por 100 comerciante,¹⁷ muchos plantadores eran también abogados, médicos e ingenieros, y podían ser censados tanto como profesionales

17. *Ibid.*

o como plantadores. De los 133 delegados que asistieron al primer mitin republicano importante realizado en São Paulo en 1873, 76 declararon que su profesión era la agricultura; otros se identificaron como hombres de negocios, abogados, «capitalistas», «artistas» y «propietarios». Muchos habían estudiado en la facultad de derecho de São Paulo, un centro de abolicionismo y republicanismos. Algunos pertenecían a la segunda o tercera generación de propietarios de plantación, otros eran profesionales que habían comprado plantaciones o se habían emparentado, por matrimonio, con familias de propietarios plantadores. Manuel Moraes Barros era abogado y propietario de plantación. Francisco Aguiar de Barros era funcionario público, tenía una compañía de importación y era también propietario de plantación. Muniz de Souza era diputado de la Asamblea provincial y plantador de café. Elías Pacheco Chaves era plantador de café, industrial, magistrado encargado de los huérfanos, jefe de policía y diputado provincial.

El Partido Republicano en São Paulo se convirtió en el más poderoso del país, debido al apoyo que recibía de hombres de posición y dinero. En fecha tan temprana como el año 1877 logró colocar tres diputados en la Asamblea provincial. Sin embargo, dos de los republicanos que resultaron elegidos se presentaron como candidatos por el Partido Liberal, una estrategia que los republicanos siguieron en otras ocasiones. El Partido Republicano Paulista (PRP), a pesar de ser el núcleo republicano más importante del país, en el año 1880 sólo tenía 960 miembros registrados. En 1884, aliado con los conservadores, consiguió colocar dos diputados en la Cámara: Prudente de Moraes y Campos Sales, quienes, tras la proclamación de la república, llegaron a ser los dos primeros presidentes civiles de Brasil. A finales de la década, en São Paulo había unos 50 círculos republicanos. Según las estimaciones para 1889, una cuarta parte del electorado de São Paulo era republicana (3.593 republicanos, 6.637 liberales, 3.957 conservadores). El partido se alió varias veces con los liberales o con los conservadores —según quién estuviera en la oposición— y adoptó una línea muy flexible en cuestiones fundamentales, como la abolición o el conflicto entre Iglesia y Estado.

Los republicanos también tenían importancia en Minas Gerais, donde muchos políticos jóvenes de familias tradicionales conservadoras, como Alvaro Botelho, o de familias liberales, como Afonso Celso, se convirtieron al republicanismo. A éstos hay que añadir algunos de los que habían sido políticos importantes en los partidos monárquicos y que se convirtieron en republicanos de última hora. Es lo que sucedió con Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que en 1886 decidió unirse a los republicanos, atrayendo consigo muchos votos.

En general, sin embargo, los republicanos de Minas Gerais recibieron un número de votos muy escaso y hasta 1887 no consiguieron crear una organización que uniera todas las asociaciones de la provincia. En Minas Gerais, como en otras provincias, hubo muchos que eran republicanos pero no estaban habilitados como electores. Sin embargo, ahí, como en otros lugares, hubo también candidatos republicanos que recibieron el apoyo de sus amigos o parientes partidarios de la monarquía. Con frecuencia las lealtades familiares contaban más que las convicciones políticas. En 1888, cuando los republicanos de Minas lucharon por un escaño en el Senado, recibieron una tercera parte de los votos. Y fue

cuando, por fin, se creó el Partido Republicano en Minas Gerais. En este punto los republicanos ya habían tenido tres diputados en la Cámara y varios en la Asamblea provincial. En vísperas de la proclamación de la república, el Partido Republicano de Minas había llegado a ser tan fuerte como los otros dos partidos. Algunos políticos que habían estado en la Cámara durante varios años —João Penido, Felício dos Santos, Cesário Alvim— se declararon republicanos. Según los escrutinios, los republicanos recibieron el 36 por 100 de los votos. Por extraño que parezca, en Río, lugar de creación del partido, los republicanos tuvieron menos éxito. Río era el centro de la burocracia monárquica y de los grandes negocios. Allí, los republicanos reclutaron apoyo principalmente entre los militares y profesionales. Las áreas rurales eran mayoritariamente monárquicas. Una y otra vez, los candidatos republicanos que se presentaban a las elecciones en Río eran derrotados, y los diarios republicanos aparecían y desaparecían. Uno de los pocos candidatos republicanos elegidos en la Asamblea provincial fue José do Patrocínio, periodista y líder abolicionista, que había recibido apoyo de la Confederación Abolicionista. Pero, a pesar de sus lentos progresos en las elecciones para el Senado de 1887, el partido recibió una séptima parte de los votos, y sus candidatos a la Asamblea provincial recibieron una quinta parte de los votos.

En 1882 se creó el Partido Republicano en Río Grande do Sul. Aquí, como en otras provincias, los republicanos fundaron círculos, crearon diarios y se presentaron a las elecciones sin mucho éxito. En 1886, lograron colocar un candidato, Assis Brasil, por primera vez en la Asamblea provincial. Muchos republicanos de Río Grande do Sul eran extranjeros para quienes el programa republicano tenía un atractivo especial. La economía de Río Grande do Sul estaba orientada principalmente hacia el mercado interno. La provincia era la principal suministradora de carne, cecina, cuero y productos alimentarios. Los inmigrantes habían desarrollado una próspera agricultura basada en las pequeñas propiedades. Las peculiaridades de la economía y de la organización social de Río Grande do Sul hacían a su población particularmente sensible a los temas de la descentralización, naturalización y separación de la Iglesia y el Estado. Esto explica por qué en 1889 los republicanos recibieron más votos que los conservadores. Sin embargo, no pudieron impedir que los liberales, que siempre habían tenido un gran apoyo en la provincia, ganaran las elecciones por amplia mayoría.

La similitud entre el programa liberal y el republicano constituía una de las mayores dificultades de los republicanos, no sólo en Río Grande do Sul, sino en todas partes. Cuando los liberales volvieron al poder en 1878, hubo muchas deserciones en las filas republicanas para unirse a los liberales. Incluso algunos de los que en 1868 habían abandonado el Partido Liberal para fundar el Partido Republicano —Lafayette Rodrigues Pereira, Cristiano Ottoni, Salvador de Mendonça— pronto volvieron a su partido original, y Lafayette Rodrigues Pereira llegó incluso a aceptar el puesto de primer ministro. Cuando los liberales volvieron al poder en 1878, la única alternativa que le quedó al Partido Republicano fue la de atacar a sus antiguos aliados. Con tal fin, apoyaron a menudo a los conservadores, que habían pasado a la oposición. Entre 1878 y 1884 —período de hegemonía liberal—, los republicanos hicieron pocos progresos. Sólo a partir

del año 1885, cuando los conservadores volvieron al poder, tomaron nueva vida. Pero mientras los republicanos hacían avances en las provincias sureñas, su situación en otros lugares del país mejoraba muy poco. Sólo en Pará, provincia en la que el auge repentino del caucho había alimentado a una elite descontenta con el centralismo, pudieron lograr un apoyo algo más significativo, pero incluso allí los republicanos no representaban más que una minoría militante. En la mayoría de las provincias restantes sólo había unos pocos círculos republicanos localizados en los centros urbanos más importantes, que reunían a un puñado de profesionales idealistas.

Dado que los republicanos eran partidarios de una federación, inicialmente rechazaron la creación de una organización nacional, y las asociaciones locales mantenían su autonomía. A menudo, los republicanos de las distintas provincias diferían sobre la cuestión de la emancipación, pero todos estaban de acuerdo en que debía ser decidida por las provincias, y no por el gobierno central. En 1884, durante los debates sobre el proyecto de ley que proponía la emancipación de los esclavos mayores de 60 años, Felício dos Santos, republicano de Minas Gerais, rechazó apoyar cualquier proyecto de ley que no reconociera el derecho de compensación al propietario del esclavo; pero los otros dos republicanos de la Cámara, Prudente de Moraes y Campos Sales, que representaban a São Paulo, apoyaron el proyecto. Los republicanos también discentían en la estrategia que el partido debía seguir. La gran mayoría estaba de acuerdo con Quintino Bocayuva, líder del partido en Río, cuya postura era de carácter gradualista, legalista y democrático. Su programa era ampliar la base electoral del partido por medio de la propaganda política. Otros, como Silva Jardim, adoptaron una línea más revolucionaria, cultivando la idea de una revolución popular. Además, estaban los partidarios de un golpe militar que derribara al gobierno. Los republicanos también discentían entre sí en la forma ideal de gobierno. La mayoría defendía los principios de la soberanía del pueblo y era partidaria de una forma de gobierno representativa; pero algunos soñaban con un régimen republicano autoritario como el sugerido por Comte.

Aunque hubiera muchas divergencias entre los republicanos, la mayoría parecía conforme con los principios que habían establecido en un proyecto de constitución para el Estado de São Paulo que el partido presentara en 1873: autonomía provincial, sistema de gobierno bicameral en que el poder ejecutivo fuera instrumento del legislativo, sufragio universal, libertad de conciencia, trabajo, prensa y enseñanza, separación de la Iglesia y el Estado, abolición de los privilegios y títulos nobiliarios, garantías a la propiedad privada y abolición del sistema de reclutamiento para la Guardia Nacional. De todos estos temas, el más importante era el de la federación. El resentimiento contra el centralismo había llegado tan lejos que, en São Paulo, dio lugar al nacimiento de un pequeño grupo secesionista. Uno de sus líderes, Martim Francisco, se lamentaba en la Asamblea provincial en 1879 del flujo de riqueza hacia las áreas del imperio, de la interferencia del gobierno central en los asuntos provinciales y de la inadecuada representación de São Paulo en el gobierno central. «Cuando queremos progresar —se lamentaba amargamente— nos envuelve la red del gobierno central, nuestros cargos políticos están llenos de gente extraña a nuestra forma de vida, a nuestros intereses y a nuestras costumbres.» Años más tarde, tras la

reforma electoral de 1881, comentaba que cada uno de los nueve diputados de São Paulo representaba a casi el doble de la población total de Espírito Santo, provincia que había obtenido dos diputados, y casi el triple de la población de Amazonas, que también obtuvo dos. Se quejaba de que São Paulo contribuía al tesoro nacional con 20 millones de milréis anuales, una sexta parte de los ingresos nacionales totales, pero sólo recibía 3 millones, suma equivalente a los derechos aduaneros obtenidos durante tres meses en Santos, el principal puerto exportador de café de la provincia. Para Martim Francisco, esos hechos eran suficientes para justificar la secesión.¹⁸

Sus quejas no carecían de fundamento. En 1883, São Paulo obtuvo cuatro senadores, mientras Minas tenía diez, Bahía siete, y Pernambuco y Río de Janeiro seis cada una. Mientras que cada senador por São Paulo representaba a 326.568 personas, un senador por Pernambuco representaba a 185.138, y el senador por Amazonas a 80.654. En la Cámara de Diputados se reprodujeron las mismas diferencias; cada diputado paulista representaba a 145.141 personas, mientras que cada diputado por Pernambuco representaba a 85.448, y los de Amazonas a 40.327. En 1889, sólo 3 de los 69 senadores procedían de São Paulo, la provincia más rica del país (con un cuarto escaño vacante). Provincias pequeñas como Sergipe, Alagoas y Paraíba tenían dos, mientras Río tenía cinco, Bahía seis, Pernambuco seis y Minas Gerais diez. Como ya hemos visto, mientras que São Paulo tenía sólo nueve diputados, Ceará, una de las provincias más pobres, tenía ocho, Río de Janeiro doce, Pernambuco trece, Bahía catorce y Minas Gerais veinte. Era raro ver a un paulista de las nuevas áreas cafeteras —la zona más rica del país— como miembro del Consejo de Estado, que estaba dominado por Minas Gerais, Bahía, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro; la mayoría de los paulistas que obtuvo tales posiciones representaba a los plantadores del valle de Paraíba, en donde las plantaciones estaban en decadencia desde 1870. Para agravar aún más la situación, São Paulo tuvo a menudo como presidentes provinciales a políticos procedentes de otras provincias.

Los paulistas procedentes de las zonas occidentales de la provincia —las más productivas— se lamentaban de su débil representación en el gobierno y empezaban a considerar el federalismo como la única forma de organización política. Esta opinión era compartida por mucha gente de otras provincias. Los de Pará, por ejemplo, también se quejaban del gobierno central, y las críticas contra el centralismo pasaron a ser comunes en Rio Grande do Sul y Pernambuco. En un congreso agrícola que tuvo lugar en octubre de 1878, los propietarios de plantaciones azucareras de Pernambuco se lamentaban amargamente de la actuación del banco gubernamental emisor de papel moneda, que en la década de 1870 había prestado 25.000 contos a las provincias del centro-sur del país, de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo y Minas Gerais. Para esas provincias, decían, iban todos los favores. «Mientras el hacendado de esas provincias, protegido por el gobierno y con los beneficios del crédito, goza de todo bienestar y despliega un lujo asiático ... los hacendados del norte, con unas pocas excepciones,

18. Tácito de Almeida, *O movimento de 1887*, São Paulo, 1934; Emilia Viotti da Costa, *Da monarquia à República. Momentos decisivos*, São Paulo, 1977, pp. 313-316.